



Asamblea General

Distr. general
11 de abril de 2024
Español
Original: inglés

Consejo de Derechos Humanos
Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones
Forzadas o Involuntarias

Comunicaciones transmitidas, casos examinados, observaciones formuladas y otras actividades realizadas por el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias*

132º período de sesiones (29 de enero a 2 de febrero de 2024)

I. Comunicaciones**

1. Entre el 28 de septiembre de 2023 y el 2 de febrero de 2024, el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, actuando con arreglo a su procedimiento urgente, decidió transmitir 182 casos a Burundi (1), China (1), Chipre (77), las Comoras (1), Egipto (1), la Federación de Rusia (78), el Líbano (2), Nicaragua (4), el Pakistán (10), la República Popular Democrática de Corea (4) y Venezuela (República Bolivariana de) (3).
2. El Grupo de Trabajo también decidió transmitir, con arreglo a su procedimiento urgente, diez casos equivalentes a desapariciones forzadas a las autoridades *de facto* del Estado de Palestina.
3. En su 132º período de sesiones, celebrado en Ginebra del 29 de enero al 2 de febrero de 2024, el Grupo de Trabajo decidió transmitir 74 nuevas denuncias de casos de desaparición forzada a la Arabia Saudita (1), Argelia (1), Bangladesh (1), Belarús (1), China (5), Egipto (4), los Emiratos Árabes Unidos (1), la Federación de Rusia (1), Gambia (1), Irán (República Islámica del) (1), Marruecos (1), Mauritania (1), el Pakistán (38), la República Árabe Siria (11), la República Popular Democrática de Corea (4), Tailandia (1) y Venezuela (República Bolivariana de) (1).
4. El Grupo de Trabajo también decidió transmitir siete nuevas denuncias de casos equivalentes a desapariciones forzadas a las autoridades *de facto* de Libia (1), el noreste de la República Árabe Siria (3), el Yemen (1) y el Estado de Palestina (2).
5. El Grupo de Trabajo dio por esclarecidos 120 casos relativos a la Arabia Saudita (2) Azerbaiyán (1), China (32), Egipto (4), la Federación de Rusia (69), Irán (República Islámica del) (1), el Líbano (1), México (1), Nicaragua (2), el Pakistán (1) y Venezuela (República Bolivariana de) (6). En total, a partir de la información que facilitaron los Gobiernos, se dieron por esclarecidos 79 casos relativos a la Arabia Saudita (2), Azerbaiyán (1), China (32), la Federación de Rusia (43) y México (1), y, a partir de la información proporcionada por las

* Los anexos del presente documento se reproducen tal como se recibieron, únicamente en el idioma en que se presentaron.

** El Grupo de Trabajo subraya que el hecho de que haya remitido casos a autoridades *de facto* no implica en absoluto juicio alguno sobre el estatuto jurídico de territorios, ciudades o zonas, ni de sus autoridades.



fuentes, se dieron por esclarecidos 41 casos relativos a Egipto (4), la Federación de Rusia (26), Irán (República Islámica del) (1), el Líbano (2), Nicaragua (2) y Venezuela (República Bolivariana de) (6). Basándose en la información proporcionada por las fuentes, el Grupo de Trabajo también dio por esclarecidos dos casos equivalentes a desapariciones forzadas que se habían transmitido a las autoridades *de facto* de Libia. Asimismo, suspendió el examen de un caso relativo a España.

6. El Grupo de Trabajo también transmitió cartas de intervención inmediata relativas a Sri Lanka y Türkiye, de las que no se recibió respuesta en el período que abarca el informe.

7. Entre el 28 de septiembre de 2023 y el 2 de febrero de 2024, el Grupo de Trabajo transmitió 27 comunicaciones junto con otros mecanismos de procedimientos especiales: 6 llamamientos urgentes conjuntos dirigidos a Belarús (1), Bélgica (1), Irán (República Islámica del) (2), Israel (1) y “otros agentes” (las autoridades *de facto* de Libia) (1); 20 cartas conjuntas de denuncia dirigidas a Angola (1), Burkina Faso (1), Colombia (1), Costa Rica (1), Egipto (1), los Emiratos Árabes Unidos (1), la Federación de Rusia (1), Honduras (1), Indonesia (1), México (1), Nepal (1), Nicaragua (1), el Níger (1), el Pakistán (1), Panamá (1), el Perú (1), la República Árabe Siria (1), Türkiye (1), Venezuela (República Bolivariana de) (1) y Zimbabwe (1); y otra carta conjunta dirigida a Malí (1)¹.

8. En su período de sesiones, el Grupo de Trabajo examinó y aprobó cinco denuncias generales relativas al Brasil, China, los Estados Unidos de América, el Iraq y Libia, que se recogen en el anexo II.

9. En el anexo III figura la lista completa de las declaraciones y los comunicados de prensa emitidos por el Grupo de Trabajo durante el período que abarca el informe.

II. Otras actividades

10. En su período de sesiones, el Grupo de Trabajo debatió asuntos internos, como los proyectos temáticos, las visitas a países, los informes de seguimiento de las visitas realizadas a Kirguistán y Tayikistán, las visitas técnicas y la asistencia técnica prevista a los Estados. Examinó su informe sobre la visita a los órganos judiciales y de derechos humanos de la Unión Africana y a otros órganos subregionales que se llevó a cabo en Arusha (República Unida de Tanzania) del 21 al 26 de octubre de 2023. Las integrantes del Grupo de Trabajo también hablaron de sus próximas visitas a países.

11. Con vistas a la elaboración de su próximo estudio temático, que presentará al Consejo de Derechos Humanos en su 57º periodo de sesiones y que se centrará en la cuestión de las desapariciones forzadas en el contexto de los procesos electorales, el Grupo de Trabajo publicó una convocatoria para que se le remitieran contribuciones entre el 22 de noviembre de 2023 y el 15 de febrero de 2024. En total, recibió 55 contribuciones: 3 procedentes de Estados y 52 de particulares, instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil².

12. Durante el período de sesiones, el Grupo de Trabajo habló sobre su siguiente estudio temático, que versará sobre las desapariciones forzadas en el contexto de la defensa de la tierra, los recursos naturales y el medio ambiente, y sobre el que tiene previsto celebrar consultas a partir de septiembre de 2024.

13. En el período de sesiones, el Grupo de Trabajo siguió debatiendo los proyectos que tenía en marcha, incluido el proyecto de declaración conjunta sobre las denominadas “desapariciones forzadas de corta duración”, que aprobará junto con el Comité contra la Desaparición Forzada en septiembre de 2024. También prosiguió su labor sobre la cuestión de las nuevas tecnologías y las desapariciones forzadas. En ese sentido, realizó un examen preliminar de los resultados de la primera fase del proyecto, que presentará en septiembre

¹ Todas las comunicaciones y las correspondientes respuestas que se mencionan en el presente informe pueden consultarse en <https://spcommreports.ohchr.org/Tmsearch/TMDocuments>.

² Véase <https://www.ohchr.org/es/calls-for-input/2024/call-contributions-thematic-study-working-group-enforced-or-involuntary>.

de 2024 en un acto en el que expondrá, paso a paso, el proceso que debe seguirse para investigar los casos de desaparición forzada mediante el uso de las nuevas tecnologías.

14. El Grupo de Trabajo habló asimismo de la asistencia técnica que está prestando a los Estados, en particular al Gobierno de Chile en relación con el examen del Plan Nacional de Búsqueda, Verdad y Justicia. También debatió el proyecto de asistencia técnica que llevará a cabo con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas —una entidad independiente de Colombia—, que tiene por objeto reforzar la capacidad de búsqueda de las personas en movimiento que han sido víctimas de desaparición forzada y dar a conocer las mejores prácticas a ese respecto.

15. En el período de sesiones, el Grupo de Trabajo decidió realizar una investigación sobre la aplicación de la jurisdicción penal universal en los casos de desaparición forzada, que prevé llevar a cabo en parte en el marco de una visita técnica a Suiza en septiembre de 2024.

16. Durante el período de sesiones, el Grupo de Trabajo también mantuvo reuniones con representantes de los Gobiernos de Bolivia (Estado Plurinacional de), el Canadá, Chile, Francia, Indonesia, Kenya, Lituania, Malasia, Países Bajos (Reino de los), el Perú, Polonia y Venezuela (República Bolivariana de). También se reunió con varios familiares de personas desaparecidas de diversos países y con abogados y representantes de organizaciones no gubernamentales e instituciones nacionales de derechos humanos que se ocupan de la cuestión de las desapariciones forzadas en distintos países. Asimismo, celebró una reunión con el Ministerio Público del Perú.

17. En el anexo IV figura una lista de otras actividades realizadas por el Grupo de Trabajo durante el período que abarca el informe.

18. El Grupo de Trabajo celebrará su 133º período de sesiones en Varsovia del 6 al 10 de mayo de 2024.

III. Información relativa a las desapariciones forzadas ocurridas en los Estados examinados por el Grupo de Trabajo durante el período de sesiones

Argelia

Procedimiento ordinario

19. El Grupo de Trabajo, actuando con arreglo a su procedimiento ordinario, transmitió al Gobierno un caso relativo a Mohamed Khelil, soldado marroquí presuntamente secuestrado el 24 de agosto de 1979 por agentes de los servicios de inteligencia militar argelinos y miembros del Frente Popular para la Liberación de Saguía el-Hamra y de Río de Oro (Frente POLISARIO)³ en el contexto del conflicto del Sáhara Occidental⁴.

20. De conformidad con sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo transmitió una copia del expediente del caso al Gobierno de Marruecos y al Frente POLISARIO.

Información facilitada por el Gobierno

21. El 5 de enero de 2024, el Gobierno transmitió información relativa al caso de Abdel Abdelmalek, pero esa información se consideró insuficiente para darlo por esclarecido.

³ El hecho de que hayan transmitido casos a agentes no estatales no implica en absoluto juicio alguno sobre el estatuto jurídico de territorios, ciudades o zonas, ni de sus autoridades.

⁴ En lo que respecta al estatuto del Sáhara Occidental, las Naciones Unidas consideraban que se trataba de un territorio no autónomo al que asistía el derecho a la libre determinación de conformidad con los principios establecidos en la Declaración sobre la Concesión de la Independencia a los Países y Pueblos Coloniales, de 14 de diciembre de 1960, que figura en las resoluciones 1514 (XV) de la Asamblea General, así como en las resoluciones de la Asamblea General 1541 (XV) y 2625 (XXV).

Angola

Carta de denuncia conjunta y respuesta

22. El 15 de enero de 2024, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, una carta de denuncia relativa a las supuestas representación e influencia excesivas de los funcionarios del Gobierno en la Comisión de Reconciliación en Memoria de Víctimas de Conflictos Políticos, y la falta de transparencia y de comunicación sobre sus actividades, en la que también se mostraba preocupación por la fiabilidad del proceso de exhumación e identificación de los restos de las presuntas víctimas de la masacre del 27 de mayo⁵.

23. El 15 de marzo de 2024, el Gobierno de Angola respondió⁶ a la carta de denuncia conjunta.

Azerbaiyán

Esclarecimiento

24. Basándose en la información facilitada anteriormente por el Gobierno de Armenia, el Grupo de Trabajo decidió dar por esclarecido un caso, tras vencer el plazo prescrito por la norma de los seis meses⁷. El caso se refiere a Vazgen Andreasyan, fallecido, cuyos restos mortales fueron identificados.

Bahrein

Información facilitada por el Gobierno

25. El 28 de diciembre de 2023, el Gobierno transmitió información suplementaria sobre los casos de Husain Marzooq y Mohamed Ramadhan, que habían sido dados por esclarecidos a partir de la información facilitada por las fuentes el 24 de mayo de 2023⁸.

Bangladesh

Procedimiento ordinario

26. El Grupo de Trabajo transmitió al Gobierno, con arreglo a su procedimiento ordinario, un caso relativo a Mohammad Rahamat Ullah, un estudiante y electricista presuntamente secuestrado el 29 de agosto de 2023 en su domicilio por personas que al parecer eran agentes del Batallón de Acción Rápida.

Belarús

Procedimiento ordinario

27. El Grupo de Trabajo transmitió al Gobierno, con arreglo a su procedimiento ordinario, un caso relativo a Maria Kalesnikava, vista por última vez el 2 de febrero de 2023 en el centro de reclusión en el que estaba cumpliendo una pena de 11 años.

Llamamiento urgente conjunto

28. El 22 de diciembre de 2023, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, un llamamiento urgente relativo a la reclusión prolongada en régimen de incomunicación de Mikalai Statkevich y Maria Kalesnikava, que

⁵ AGO 3/2023.

⁶ Véase la respuesta al documento AGO 3/2023.

⁷ [A/HRC/WGEID/130/1](#), párr. 21.

⁸ [A/HRC/WGEID/131/1](#), párr. 30.

podría constituir una desaparición forzada, y a la restricción parcial de la comunicación con la familia impuesta a un defensor de los derechos humanos encarcelado en Belarús⁹.

Bélgica

Llamamiento urgente conjunto

29. El 27 de octubre de 2023, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, un llamamiento urgente relativo a dos nacionales belgas recluidas en el campamento de Al-Roj, en el noreste de la República Árabe Siria, que al parecer no fueron repatriadas porque, al no tener hijos a su cargo en los campamentos, habían quedado excluidas de la política de repatriación de Bélgica. Si no se las repatría, podrían ser víctimas de desaparición forzada¹⁰.

Bhután

Información facilitada por el Gobierno

30. El Grupo de Trabajo examinó la información transmitida por el Gobierno de Nepal relativa al caso de Lok Nath Acharya, pero consideró que era insuficiente para darlo por esclarecido.

31. De conformidad con sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo transmitió a los Gobiernos de Bhután y la India la información facilitada por el Gobierno de Nepal.

Brasil

Denuncias generales

32. El Grupo de Trabajo recibió de fuentes fidedignas información sobre presuntos obstáculos y contravenciones observados en relación con la aplicación en el Brasil de la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Las denuncias se refieren a desapariciones forzadas ocurridas durante la dictadura militar, entre 1964 y 1985, y después de que se instaurara la democracia en el Brasil, y que siguen sin resolverse (véase el anexo II).

Burkina Faso

Carta de denuncia conjunta

33. El 2 de febrero de 2024, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, una carta de denuncia relativa al secuestro y la desaparición forzada del defensor de los derechos humanos Daouda Diallo¹¹.

Burundi

Procedimiento urgente

34. El Grupo de Trabajo transmitió al Gobierno, con arreglo a su procedimiento urgente, un caso relativo a una persona presuntamente secuestrada en septiembre de 2023 por la Policía Nacional de Burundi.

⁹ BLR 13/2023.

¹⁰ BEL 3/2023.

¹¹ BFA 1/2024.

Chile

Aplicación de la norma de los seis meses

35. El 22 de septiembre de 2022¹², basándose en la información facilitada por el Gobierno, el Grupo de Trabajo decidió aplicar la norma de los seis meses a tres casos pendientes, con arreglo a sus métodos de trabajo.

Información facilitada por el Gobierno

36. El 22 de septiembre de 2022¹³, el Gobierno transmitió información relativa a 782 casos, pero esa información se consideró insuficiente para darlos por esclarecidos.

China

Procedimiento urgente

37. El Grupo de Trabajo transmitió al Gobierno, con arreglo a su procedimiento urgente, un caso relativo a Tsebo, un exagente de policía y miembro del Partido Comunista presuntamente detenido el 12 de septiembre de 2023 en un restaurante del condado de Chenduo (Tridu en tibetano), en la Prefectura Autónoma Tibetana de Yushu, por agentes chinos de la policía local.

Procedimiento ordinario

38. El Grupo de Trabajo transmitió al Gobierno, con arreglo a su procedimiento ordinario, cinco casos relativos a cinco personas presuntamente recluidas de forma arbitraria en agosto de 2022 en el condado de Serthar, en la Prefectura Autónoma Tibetana de Ganzi (provincia de Sichuan), por agentes de la policía local china por realizar actividades religiosas, como quemar incienso y orar. Se cree que posteriormente se las trasladó a un lugar desconocido en el condado de Serthar. Según se informa, una de ellas murió mientras se encontraba bajo custodia policial y sus restos no se han devuelto a la familia.

Esclarecimiento

39. Basándose en la información facilitada anteriormente por el Gobierno, el Grupo de Trabajo decidió dar por esclarecidos 32 casos, tras vencer el plazo prescrito por la norma de los seis meses, con arreglo a sus métodos de trabajo¹⁴.

Denuncia general

40. El Grupo de Trabajo recibió de fuentes fidedignas información sobre presuntos obstáculos y contravenciones observados en relación con la aplicación en China de la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. En particular, determinadas formas de privación de libertad previstas en el sistema penal nacional parecen tener elementos constitutivos de una desaparición forzada (véase el anexo II).

Colombia

Carta de denuncia conjunta y respuesta

41. El 27 de octubre de 2023, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, una carta de denuncia relativa a la situación humanitaria en el

¹² El Grupo de Trabajo constató con pesar que la respuesta del Gobierno no pudo tramitarse dentro de los plazos establecidos debido a un error administrativo.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ A/HRC/WGEID/130/1, párr. 26.

tapón del Darién, que afecta a las personas migrantes que transitan por esa ruta, donde se siguen denunciando muertes y desapariciones¹⁵.

42. El 22 de diciembre de 2023 y el 20 de febrero de 2024, el Gobierno de Colombia respondió a la carta de denuncia conjunta¹⁶.

Costa Rica

Carta de denuncia conjunta

43. El 27 de octubre de 2023, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, una carta de denuncia relativa a la situación humanitaria en el tapón del Darién y al aumento del número de personas que lo cruzan en dirección a Costa Rica, y donde se siguen denunciando abusos y violaciones de los derechos humanos, incluidas desapariciones¹⁷.

44. El 21 de diciembre de 2023, el Gobierno de Costa Rica respondió a la carta de denuncia conjunta¹⁸.

Comoras

Procedimiento urgente

45. El Grupo de Trabajo transmitió al Gobierno, con arreglo a su procedimiento urgente, un caso relativo a Achmet Said Mohamed, presidente de la organización de oposición comorense “Hury”, que presuntamente fue secuestrado el 9 de enero de 2024 frente a su domicilio en Moroni por las fuerzas militares comorenses.

Chipre

Procedimiento urgente

46. El Grupo de Trabajo transmitió al Gobierno, con arreglo a su procedimiento urgente, 77 casos relativos a Suleiman Mohammad Abu Kashto, Suleiman Mustapha Abu Kashto, Bakr al-Erq, Khadija al-Erq, Leah al-Erq, Lina al-Erq, Moussa Lashekhu, Ibrahim al-Ammarien, Ali Ibrahim, Louay al-Sayed Ahmed, Mahmoud Kantar, Omar Abdullah, Mohammed al-Najm, Abdul Rahman al-Najm, Fadi al-Dahis, Mohammed al-Hassan, Walid al-Shaker, Mohammad Diaa al-Ayyash, Omar al-Barhoum, Mohammed Ali Dakhan, Ali al-Abdullah, Ismail al-Jamal, Mohammed Ousman, Khaled Mohamid, Mohammed Darwish, Ahmad Basel Darwish, Hamed Nazal, Bushra Sharaf al-Din, Mohammed Jamal-Aldin, Abdullah Jamal-Aldin, Ahmad Jamal-Aldin, Khayryi Jamal-Aldin, Amal Dabko, Mohammed Keblawi, Mohammed Keblawi, Kaseem Keblawi, Mohammed al-Homsi, Mohammed al-Housni, Anas Shtiwi, Monir al-Houri, Ayham Anizan, Maher Issa, Mohammed al-Dhubyan, Ibadah Abu Rukba, Kassem al-Sheikh Kassem, Anas al-Hazouri, Fatima al-Yasin, Shahad al-Ahmad, Fouad Hanadi, Ghaith al-Ahmad, Ahmad al-Almouri, Ali al-Kalash, Abdulwahab Debak, Faisal al-Abdou, Abdullah al-Abdou, Hasan al-Ali, Sherein al-Ali, Hussein al-Ali, Ahmad al-Mohamad, Ibrahim al-Mohamad, Wissam al-Nayef, Ahmad al-Hamdo, Diab al-Jouma, Amal al-Jouma, Abdelwahab al-Jouma, Moustafa al-Jouma, Jouma al-Jouma, Moustafa al-Jouma, Aida al-Ahmad, Mousaa al-Ali Shaihou, Hasan Zaloukh, Ahmad al-Hamid, Osama al-Ibrahim, Mohammad al-Khasawneh, Qusay al-Mahdi, Nidal Shihadat y Wajdi Rizk, desaparecidos el 12 de diciembre de 2023 después de haber entrado en las aguas territoriales de Chipre en su travesía marítima desde el Líbano a Europa.

¹⁵ COL 8/2023.

¹⁶ Véanse las respuestas al documento COL 8/2023.

¹⁷ CRI 1/2023.

¹⁸ Véase la respuesta al documento CRI 1/2023.

República Popular Democrática de Corea

Procedimiento urgente

47. El Grupo de Trabajo transmitió al Gobierno, con arreglo a su procedimiento urgente, cuatro casos relativos a cuatro personas presuntamente recluidas en régimen de incomunicación por la policía china en torno a septiembre y octubre de 2023 en el Centro Penitenciario de Baishan, en la provincia de Jilin (China) antes de ser devueltas por la fuerza a la República Popular Democrática de Corea. De conformidad con sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo transmitió copias de los expedientes de los casos al Gobierno de China.

Observación

48. Al examinar los casos de la República Popular Democrática de Corea, el Grupo de Trabajo manifestó su extrema preocupación por el hecho de que, al parecer, algunas de las personas retornadas habían sido víctimas de trata, inducidas a viajar a China para someterlas a matrimonio forzado, servidumbre doméstica y esclavitud sexual, incluida fecundación forzada. El Grupo de Trabajo lamenta que pueda haber muchas más personas huidas de la República Popular Democrática de Corea y recluidas en China a las que luego se ha repatriado de forma forzosa y sumaria después de que China pusiera fin, en enero de 2023, a las restricciones impuestas en aplicación de su política de “cero COVID” para luchar contra la enfermedad por coronavirus (COVID-19).

Procedimiento ordinario

49. El Grupo de Trabajo también transmitió al Gobierno, con arreglo a su procedimiento ordinario, cuatro casos relativos a las siguientes personas:

a) Una persona que huyó de la República Popular Democrática de Corea y que presuntamente fue recluida de forma arbitraria en 2010 en Kunming (China) y devuelta por la fuerza a la República Popular Democrática de Corea por agentes de la seguridad pública china;

b) Un adolescente que huyó de la República Popular Democrática de Corea y presuntamente fue recluido de forma arbitraria en 2016 en Yanji, en la provincia de Jilin (China), por agentes de la seguridad pública china, para ser devuelto por la fuerza a la República Popular Democrática de Corea. De conformidad con sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo transmitió una copia del expediente del caso a los Gobiernos de China y de la República de Corea;

c) Un antiguo funcionario público y desertor de la República Popular Democrática de Corea que presuntamente fue recluido de forma arbitraria en 2009 en el condado de Changbai (China) por militares de fronteras chinos y devuelto por la fuerza a la ciudad de Hyesan, en la provincia de Ryanggang (República Popular Democrática de Corea);

d) Yeon Kyeong-Hyeok, médico presuntamente secuestrado a finales de marzo de 2006 en su domicilio, al parecer por agentes del Ministerio de Seguridad del Estado.

Información facilitada por las fuentes

50. Las fuentes facilitaron información actualizada sobre un caso pendiente, pero esa información se consideró insuficiente para darlo por esclarecido.

Información facilitada por el Gobierno

51. El 18 de diciembre de 2023, el Gobierno respondió a la carta del Grupo de Trabajo de fecha de 13 de noviembre de 2023, en la que este había transmitido los casos examinados con arreglo a su procedimiento ordinario en su 131^{er} período de sesiones¹⁹. El Grupo de Trabajo había vuelto a lamentar que las autoridades de la República Popular Democrática de Corea siguieran sistemáticamente sin reconocer ni examinar los casos transmitidos con arreglo a su procedimiento de acción humanitaria.

¹⁹ A/HRC/WGEID/131/1, párrs. 44 y 45.

Ecuador

Información facilitada por las fuentes

52. Las fuentes facilitaron información actualizada sobre un caso pendiente, pero esa información se consideró insuficiente para darlo por esclarecido.

Egipto

Procedimiento urgente

53. El Grupo de Trabajo transmitió al Gobierno, con arreglo a su procedimiento urgente, un caso relativo a Wael Abdul Ghani Mohamed Salim, que al parecer fue detenido el 19 de septiembre de 2023 en su domicilio por agentes de policía uniformados.

Procedimiento ordinario

54. El Grupo de Trabajo transmitió al Gobierno, con arreglo a su procedimiento ordinario, cuatro casos relativos a las siguientes personas:

- a) Mohamed Qerba, detenido el 12 de enero de 2018 por agentes de la seguridad del Estado;
- b) Gouda Harbi, detenido el 2 de agosto de 2019 por agentes de las fuerzas nacionales de seguridad;
- c) Moussaab Khalil, detenido el 28 de enero de 2019 en el domicilio familiar por agentes de las fuerzas nacionales de seguridad;
- d) Ahmed Tarek Eissa Siam, que fue visto por última vez el 26 de junio de 2019 después de presentarse en la comisaría de Belbeis.

Esclarecimiento basado en la información facilitada por las fuentes

55. Basándose en la información proporcionada por diversas fuentes, el Grupo de Trabajo decidió dar por esclarecidos cuatro casos, relativos a Youssef Mohamed Sobhi al-Sunaiti, Essam Gharib Mahran Khalil y Mostafa Mohamed el-Sayed Hussein, que al parecer están encarcelados, y a Mohamed Ibrahim Farid Jabr, que, según se informa, se encuentra en libertad.

Información facilitada por el Gobierno

56. El 10 de enero de 2024, el Gobierno transmitió información relativa a un caso pendiente, pero esa información se consideró insuficiente para darlo por esclarecido.

Carta de denuncia conjunta

57. El 22 de enero de 2024, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, una carta de denuncia relativa a la desaparición forzada de los defensores de los derechos humanos Hoda Abdel-Moneim y Moaaz al-Sharqawy y a la formulación de nuevas acusaciones contra ellos, siguiendo una práctica conocida comúnmente como “rotación”. En la carta también se expresaba preocupación por que la Sra. Abdel-Moneim no recibiera tratamiento médico; y por que el Sr. Al-Sharqawy hubiera sido detenido en mayo de 2023 sin que mediara ninguna orden judicial y, por tanto, sin respetar las debidas garantías, hubiera sido sometido a malos tratos y hubiera sido víctima de desaparición forzada por segunda vez en cinco años, ya que la primera fue en 2018, y hubiera visto confirmada su condena a diez años de prisión por el Tribunal de Excepción después de un juicio en el que no se habían respetado las debidas garantías procesales²⁰.

²⁰ EGY 7/2023.

El Salvador

Aplicación de la norma de los seis meses

58. Basándose en la información facilitada por el Gobierno, el Grupo de Trabajo decidió aplicar la norma de los seis meses a un caso pendiente, con arreglo a sus métodos de trabajo.

Información facilitada por el Gobierno

59. El 27 de octubre de 2023, el Gobierno transmitió información relativa a 303 casos, pero esa información se consideró insuficiente para darlos por esclarecidos.

Gambia

Procedimiento ordinario

60. El Grupo de Trabajo transmitió al Gobierno, con arreglo a su procedimiento ordinario, un caso relativo a Peter Mensah, que fue detenido el 22 de julio de 2005 en Barra por agentes de la marina gambiana. De conformidad con sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo transmitió una copia del expediente del caso al Gobierno de Ghana.

Información facilitada por las fuentes

61. Las fuentes facilitaron información actualizada sobre un caso pendiente, pero esa información se consideró insuficiente para darlo por esclarecido.

Honduras

Carta de denuncia conjunta

62. El 15 de diciembre de 2023, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, una carta de denuncia relativa a la desaparición forzada de una persona, presuntamente a manos de agentes del Estado, el hostigamiento continuado de su familia por agentes de seguridad del Estado tras la denuncia de la desaparición, el asesinato de su padre y la reclusión de otro familiar suyo²¹.

Indonesia

Carta de denuncia conjunta y respuesta

63. El 15 de diciembre de 2023, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, una carta de denuncia relativa a la supuesta inadecuación de algunas medidas adoptadas por las autoridades competentes de Indonesia para garantizar la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición en el marco de la política del Gobierno de resolución no judicial de las violaciones manifiestas de los derechos humanos cometidas en el pasado²².

64. El 8 de marzo de 2024, el Gobierno de Indonesia respondió a la carta de denuncia conjunta²³.

²¹ HND 4/2023.

²² IDN 8/2023.

²³ Véase la respuesta al documento IDN 8/2023.

Irán (República Islámica del)

Procedimiento ordinario

65. El Grupo de Trabajo transmitió al Gobierno, con arreglo a su procedimiento ordinario, un caso relativo a Mosa Peyambernejad, que fue detenido el 5 de agosto de 1983 en su domicilio por el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica.

Esclarecimiento basado en la información facilitada por las fuentes

66. Basándose en la información proporcionada por diversas fuentes, el Grupo de Trabajo decidió dar por esclarecido el caso relativo a Delir Mardookhi, que al parecer se encuentra en libertad.

Llamamiento urgente conjunto

67. El 11 de enero de 2024, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, un llamamiento urgente relativo a los casos de Mojahed (Abbas) Kourkouri y Reza Rasaei, que corrían el riesgo de ser ejecutados de forma inminente en la República Islámica del Irán después de que el Tribunal Supremo confirmara su condena a muerte por “homicidio”²⁴.

68. El 24 de enero de 2024, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, un llamamiento urgente relativo a cuatro kurdos, Pejman Fatehi, Vafa Azarbar, Mohammad (Hazhir) Faramarzi y Mohsen Mazloum, que corren un grave riesgo de ser ejecutados en secreto en la República Islámica del Irán sin que se dé previo aviso a sus familiares y abogados, ya que desde julio de 2022 se encuentran en situación de desaparición forzada a manos de las autoridades²⁵.

Iraq

Denuncia general

69. El Grupo de Trabajo recibió de fuentes fidedignas información sobre presuntos obstáculos y contravenciones observados en relación con la aplicación en el Iraq de la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Las denuncias se refieren al proyecto de ley de personas desaparecidas que el Gabinete del Primer Ministro del Iraq sometió al Consejo de Representantes del país en 2023. Según la información recibida, varias disposiciones del proyecto de ley son contrarias a las normas de derecho internacional, que el Iraq está obligado a respetar como Estado parte en la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, a la que se adhirió en 2010 (véase el anexo II).

Israel

Llamamiento urgente conjunto

70. El 23 de noviembre de 2023, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, un llamamiento urgente relativo al hecho de que, en las ciudades y pueblos de la Ribera Occidental ocupada y en Jerusalén Oriental, se siga deteniendo y recluyendo de forma generalizada a palestinos, incluidos activistas de derechos humanos, abogados, artistas, estudiantes y niños. Al parecer, en algunos casos la suerte y el paradero de las personas detenidas o capturadas siguen sin conocerse, por lo que se cumplen los criterios para hablar de desaparición forzada. Se remitió una copia del llamamiento urgente conjunto al Estado de Palestina²⁶.

²⁴ IRN 1/2024.

²⁵ IRN 3/2024.

²⁶ ISR 9/2023.

Kazajstán

Información facilitada por el Gobierno

71. El 4 de diciembre de 2023, el Gobierno transmitió información relativa a un caso, pero esa información se consideró insuficiente para darlo por esclarecido.

Líbano

Procedimiento de acción urgente

72. El Grupo de Trabajo transmitió al Gobierno, con arreglo a su procedimiento de acción urgente, dos casos relativos a las siguientes personas:

- a) Al Haj Ahmad Ahmad, residente de Trípoli, presuntamente secuestrado el 29 de diciembre de 2023 en su domicilio por agentes de la inteligencia militar libanesa;
- b) Amer Haddara, residente de Trípoli, presuntamente secuestrado el 25 de diciembre de 2023 por las fuerzas de la Seguridad General.

Esclarecimiento basado en información facilitada por las fuentes

73. Basándose en la información proporcionada por diversas fuentes, el Grupo de Trabajo decidió dar por esclarecido el caso relativo a Amer Haddara, que al parecer se encuentra en libertad.

Libia

Información facilitada por las fuentes

74. Las fuentes facilitaron información actualizada sobre un caso pendiente, pero esa información se consideró insuficiente para darlo por esclarecido.

Denuncia general

75. El Grupo de Trabajo recibió de fuentes fidedignas información sobre presuntos obstáculos y contravenciones observados en relación con la aplicación en Libia de la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Las denuncias se refieren a la privación arbitraria de libertad y la desaparición forzada de migrantes, refugiados y solicitantes de asilo en Libia, entre ellos mujeres, niños (a menudo no acompañados) y personas con discapacidad. También se ha informado al Grupo de Trabajo de que los migrantes internados en centros de detención se encuentran en condiciones inhumanas y de que a menudo se obstaculiza la labor de las organizaciones de la sociedad civil que intentan vigilar las condiciones de detención y ayudar a los internos. Además, según la información recibida por el Grupo de Trabajo, no se ha abierto ninguna investigación sobre las circunstancias y los abusos mencionados, que al parecer quedan impunes, y no existe ningún recurso efectivo para obtener reparación por los daños sufridos en esos centros de detención (véase el anexo II).

Malí

Otra carta conjunta

76. El 31 de octubre de 2023, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, una carta sobre el marco legislativo de Malí relativo a la lucha contra el terrorismo, que al parecer es contrario a las normas de derecho internacional y podría propiciar que se produzcan casos desaparición forzada²⁷.

²⁷ MLI 1/2023.

Mauritania

Procedimiento ordinario

77. El Grupo de Trabajo transmitió al Gobierno, con arreglo a su procedimiento ordinario, un caso relativo a El Ghalia Mohamd Yahdih, que presuntamente fue secuestrado en 1980 en el centro de la ciudad de Nuadibú por desconocidos que al parecer estaban implicados en el conflicto del Sáhara Occidental.

México

Esclarecimiento

78. Basándose en la información facilitada anteriormente por el Gobierno, que se transmitió a la fuente entre períodos de sesiones, en mayo de 2023, el Grupo de Trabajo decidió dar por esclarecido un caso tras vencer el plazo prescrito por la norma de los seis meses²⁸. El caso se refiere a José Moisés Sánchez Cerezo, al parecer fallecido, cuyos restos mortales han sido identificados y devueltos a sus allegados.

Carta de denuncia conjunta y respuesta

79. El 21 de diciembre de 2023, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, una carta de denuncia relativa a la supuesta falta de transparencia y metodología de la revisión del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas en México, así como a la ausencia de una consulta pública previa con respecto al proceso de selección de la nueva Comisionada de la Comisión Nacional de Búsqueda²⁹.

80. El 19 de febrero de 2024, el Gobierno de México respondió a la carta de denuncia conjunta³⁰.

Nepal

Información facilitada por el Gobierno

81. El 1 de septiembre de 2021, el Gobierno transmitió información sobre 464 casos, entre ellos 59 relativos a mujeres y 35 a niños, pero esa información se consideró insuficiente para darlos por esclarecidos³¹. Al transmitir los casos, el Grupo de Trabajo lamentó que, debido a un error administrativo, la respuesta no se hubiera podido tramitar dentro de los plazos establecidos.

Carta de denuncia conjunta

82. El 15 de diciembre de 2023, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, una carta de denuncia relativa a los graves efectos que tenían las desapariciones forzadas entre las mujeres de Nepal, en especial las esposas, madres y familiares de los desaparecidos, y al hecho de que las autoridades del Estado no buscaran eficazmente a los desaparecidos, no llevaran a cabo investigaciones independientes, imparciales, exhaustivas y eficaces, y no aseguraran una reparación integral a las familias³².

²⁸ El Grupo de Trabajo lamenta que, debido a un error administrativo, la comunicación se transmitiera a la fuente entre períodos de sesiones, en mayo de 2023.

²⁹ MEX 12/2023.

³⁰ Véase la respuesta al documento MEX 12/2023.

³¹ El Grupo de Trabajo observó con pesar que la respuesta original transmitida por el Gobierno de Nepal, con fecha de 1 de septiembre de 2021 y reenviada el 29 de junio de 2022, no se tramitó dentro de los plazos establecidos debido a un error administrativo.

³² NPL 3/2023.

Nicaragua

Procedimiento urgente

83. El Grupo de Trabajo transmitió al Gobierno, con arreglo a su procedimiento urgente, cuatro casos relativos a las siguientes personas:

a) Brooklyn Rivera Bryan, líder indígena misquito y miembro de la Asamblea Nacional de Nicaragua, presuntamente sometido a desaparición forzada el 29 de septiembre de 2023 por su participación en el Movimiento Indígena de la Costa Atlántica (YATAMA), un partido político indígena de la costa caribeña de Nicaragua;

b) Freddy Antonio Quezada, presuntamente sometido a desaparición forzada el 29 de noviembre de 2023 en su domicilio por la Policía Nacional de Nicaragua;

c) Carlos José Avilés Cantón, vicario general de la arquidiócesis de Managua, que al parecer fue secuestrado después de celebrar misa en la parroquia Santo Cristo de Las Colinas (Nicaragua);

d) Isidoro del Carmen Mora Ortega, obispo de la diócesis de Siuna, que al parecer fue secuestrado el 20 de diciembre de 2023 en el municipio de La Cruz de Río Grande, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur, por agentes de las fuerzas especiales de la Policía Nacional de Nicaragua.

Esclarecimiento basado en la información facilitada por las fuentes

84. Basándose en la información proporcionada por diversas fuentes, el Grupo de Trabajo decidió dar por esclarecidos dos casos, relativos a Carlos José Avilés Cantón y a Isidoro del Carmen Mora Ortega, que al parecer se encuentran en libertad.

Carta de denuncia conjunta

85. El 15 de diciembre de 2023, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, una carta de denuncia relativa al caso de Fanor Alejandro Ramos, privado de libertad y presuntamente sometido a desaparición forzada durante 49 días³³.

Níger

Carta de denuncia conjunta

86. El 20 de diciembre de 2023, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, una carta de denuncia relativa al acoso judicial, la detención arbitraria y la desaparición forzada de Samira Sabou³⁴.

Pakistán

Procedimiento de acción urgente

87. El Grupo de Trabajo transmitió al Gobierno, con arreglo a su procedimiento de acción urgente, diez casos relativos a las siguientes personas:

a) Una persona presuntamente secuestrada en noviembre de 2023 en su lugar de trabajo en la provincia de Baluchistán, al parecer por agentes del Estado;

b) Dos personas presuntamente secuestradas en noviembre de 2023 en la provincia de Baluchistán por agentes del Cuerpo de Fronteras;

c) Cuatro personas presuntamente secuestradas en octubre de 2023 en la provincia de Baluchistán por agentes del Estado;

³³ NIC 4/2023.

³⁴ NER 2/2023.

- d) Una persona presuntamente secuestrada en septiembre de 2023 en Karachi por agentes del Estado;
- e) Una persona presuntamente secuestrada en septiembre de 2023 en la provincia de Baluchistán por agentes de los servicios de inteligencia;
- f) Una persona presuntamente secuestrada en septiembre de 2023 en la provincia de Baluchistán por agentes del Cuerpo de Fronteras y de los servicios de inteligencia.

Procedimiento ordinario

88. El Grupo de Trabajo transmitió 38 casos al Gobierno con arreglo a su procedimiento ordinario (véase el anexo D).

Observación

89. El Grupo de Trabajo observó que, desde que se inició la crisis constitucional en el Pakistán en 2022, cada vez recibía y registraba más denuncias de casos. Lamentó profundamente que muchos casos de desaparición forzada, en particular en las provincias de Baluchistán, Jaiber Pastunjuá, Punyab y Sind, hubieran sido perpetrados presuntamente por agentes del ejército y la policía, incluidos miembros de fuerzas paramilitares como el Cuerpo de Fronteras y los Rangers.

Esclarecimiento basado en la información facilitada por las fuentes

90. Basándose en la información proporcionada por diversas fuentes, el Grupo de Trabajo decidió dar por esclarecido el caso de una persona de la provincia de Baluchistán, que al parecer se encuentra en libertad.

Carta de denuncia conjunta

91. El 22 de noviembre de 2023, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, una carta en la que se denunciaba la desaparición forzada, la reclusión y el procesamiento de trabajadores de los medios de comunicación, periodistas y figuras públicas, entre otras personas, al parecer por apoyar al partido Tehreek-e-Insaf del Pakistán y en el contexto de la destitución y detención del ex Primer Ministro, Imran Khan³⁵.

Panamá

Carta de denuncia conjunta y respuesta

92. El 27 de octubre de 2023, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, una carta de denuncia relativa a la situación humanitaria en el Tapón del Darién, que afecta a las personas migrantes, incluidos niños, niñas y adolescentes, que transitan por esa ruta, donde se siguen registrando muertes, desapariciones, violencia sexual y otras violaciones de los derechos humanos³⁶.

93. El 22 de diciembre de 2023, el Gobierno de Panamá respondió a la carta de denuncia conjunta³⁷.

Perú

Carta de denuncia conjunta y respuesta

94. El 11 de diciembre de 2023, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, una carta de denuncia relativa a la liberación del expresidente Alberto Fujimori, condenado en 2009 a 25 años de prisión por crímenes

³⁵ PAK 9/2023.

³⁶ PAN 1/2023.

³⁷ Véase la respuesta al documento PAN 1/2023.

conforme al derecho internacional, como ejecuciones extrajudiciales, tortura y desapariciones forzadas³⁸.

95. El 9 de febrero de 2024, el Gobierno del Perú respondió a la carta de denuncia conjunta³⁹.

Filipinas

Información facilitada por el Gobierno

96. El 13 de noviembre de 2023, el Gobierno transmitió información relativa a dos casos, pero esa información se consideró insuficiente para darlos por esclarecidos.

Federación de Rusia

Procedimiento urgente

97. El Grupo de Trabajo transmitió al Gobierno, con arreglo a su procedimiento urgente, 78 casos perpetrados en Ucrania por fuerzas de la Federación de Rusia relativos a las siguientes personas:

a) Un niño que presuntamente fue secuestrado el 26 de febrero de 2022 en su domicilio de la provincia de Luhansk por fuerzas armadas de la Federación de Rusia y grupos armados afiliados;

b) Un niño que desapareció después del 16 de marzo de 2022, cuando tuvo lugar el intento de evacuación de Mariúpol, en la provincia de Donetsk, que en ese momento estaba rodeada por fuerzas armadas de la Federación de Rusia y grupos armados afiliados;

c) Vladyslav Leshchenko, soldado ucraniano que desapareció el 20 de marzo de 2022, después de ser capturado en la provincia de Kyiv por fuerzas armadas de la Federación de Rusia y grupos armados afiliados;

d) Yurii Hulchuk, soldado ucraniano desaparecido el 12 de abril de 2022, después de ser capturado en Mariúpol por fuerzas armadas de la Federación de Rusia y grupos armados afiliados;

e) Mykola Tsyhanok, soldado ucraniano desaparecido el 23 de abril de 2022, tras un enfrentamiento con fuerzas armadas de la Federación de Rusia cerca de Dovhenke, en la provincia de Khárkiv;

f) Serhii Ivashchenko, secuestrado el 31 de agosto de 2022 en su domicilio de Starobilsk, en la provincia de Luhansk, por fuerzas armadas de la Federación de Rusia y grupos armados afiliados;

g) Artem Kudzhanov, secuestrado el 28 de octubre de 2022 en su domicilio de Bohachka, en la provincia de Luhansk, por fuerzas armadas de la Federación de Rusia y grupos armados afiliados;

h) Serhii Yeromenko, secuestrado el 22 de noviembre de 2022 en su domicilio de Novooleksandrivka, en la provincia de Luhansk, por fuerzas armadas de la Federación de Rusia y grupos armados afiliados;

i) Viacheslav Lazarchuk, Volodymyr Liashenko, Vasyl Doloban, Mykola Zachenko, Volodymyr Zaviriukhin, Maksym Ditman, Oleksandr Yakovynets, Vladyslav Kryvoruchenko, Vitalii Hlebov, Oleksii Bas, Andrii Hamolia, Andrii Ishchenko, Viktor Kondusha, Serhii Hryhoriuk, Anatolii Karpiv, Vitalii Lysiuk, Oleksandr Lazarenko, Yevhen Kryklyvyi, Oleksandr Marchuk, Yurii Androniichuk, Oleksandr Kushnarov, Dmytro Riazanov, Oleksandr Yurko, Artem Herasymenko, Kyrylo Rekhtlane, Dmytro Ivashchuk, Serhii Rozhok, Anatolii Zelenyi, Andrii Horbenko, Oleh Yatchenko, Andrii Karpenkov, Ihor Shevchuk, Stanislav Shostak, Andrii Kovalov, Oleksandr Zakharov, Serhii Dziubenko, Pavlo

³⁸ PER 9/2023.

³⁹ Véase la respuesta al documento PER 9/2023.

Omelchenko, Oleksii Valdovskyi, Viktor Burakovskiy, Dmytro Ptakh, Ihor Voznyi, Mykhailo Tyshchenko, Oleksandr Stopkan, Andrii Kakhychka, Serhii Matvieiev, Maksym Savitskiy, Ruslan Soroka, Ivan Bezkorovainyi, Yurii Bortniuk, Oleksandr Khomenko, Dmytro Prokopenko, Oleksandr Pivniev, Volodymyr Herashchenko, Serhii Herasymchuk, Dmytro Kyrychenko, Vitalii Pavlenko, Vadym Rakut, Maksym Soltanenko, Vitalii Yavtushenko, Maksym Kobzarenko, Stanislav Tretiakov, Leonsii Popov, Dmytro Yarish, Kostiantyn Symonenko, Oleh Zabolotnii, Ihor Hordashko, Dmytro Osiik, Vitalii Kyrnos, Serhii Pasiaka y Oleksandr Boboshko, soldados ucranianos desaparecidos entre el 1 de julio de 2022 y el 27 de febrero de 2023 tras enfrentamientos con fuerzas armadas de la Federación de Rusia y grupos armados afiliados en la provincia de Luhansk.

98. De conformidad con sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo remitió copias de los expedientes de los casos al Gobierno de Ucrania. También transmitió copia del expediente de un caso al Gobierno de Belarús.

Procedimiento ordinario

99. El Grupo de Trabajo transmitió al Gobierno, con arreglo a su procedimiento ordinario, un caso relativo a Ihor Malyshev, que fue secuestrado el 25 de noviembre de 2021 en el paso de Stanytsia Luhanska por fuerzas armadas de la Federación de Rusia y grupos armados afiliados.

Esclarecimiento basado en la información facilitada por las fuentes

100. Basándose en la información proporcionada por diversas fuentes, el Grupo de Trabajo decidió dar por esclarecidos 26 casos, relativos a Volodymyr Kolibaba, Yurii Melnyk, Oleksandr Saponenko, Andrii Starynshchak, Viktor Tkach, Vitalii Papenko, Viktor Linnikov, Dmytro Sobolevskiy, Oleksandr Honcharov, Maksym Kolesnikov, Viacheslav Likhtanskiy, Yevhen Bondar y Serhii Bachevskiy, que han sido liberados por la Federación de Rusia y se encuentran en libertad; Viacheslav Horban, Anton Volovych, Serhii Kravtsov, Ivan Kovalchuk, Roman Tretiakov, Viacheslav Hryhoriev y Dmytro Mezhenskiy, cuya suerte y paradero se han esclarecido; Vladyslav Herykh, Yurii Mykytiuk, Yehor Kolosovskiy, Oleksandr Fedorov y Andrii Lozovytskiy, que fallecieron y cuyos restos mortales se han identificado; y Mykhailo Karetniy, que falleció mientras se encontraba en un centro de reclusión.

Información facilitada por las fuentes

101. Las fuentes facilitaron información actualizada sobre 278 casos pendientes, pero esa información se consideró insuficiente para darlos por esclarecidos.

Información facilitada por otros Estados interesados

102. Los días 1 de agosto y 29 de septiembre de 2023, el Gobierno de Ucrania facilitó información relativa a 192 casos pendientes incluidos en las estadísticas de la Federación de Rusia, pero esa información se consideró insuficiente para darlos por esclarecidos.

Aplicación de la norma de los seis meses

103. Basándose en la información facilitada por el Gobierno de Ucrania, el Grupo de Trabajo decidió aplicar la norma de los seis meses a 20 casos pendientes incluidos en las estadísticas de la Federación de Rusia, con arreglo a sus métodos de trabajo.

Esclarecimiento

104. Basándose en la información facilitada anteriormente por el Gobierno, el Grupo de Trabajo decidió dar por esclarecidos 43 casos, tras vencer el plazo prescrito por la norma de los seis meses⁴⁰. Los casos se refieren a Volodymyr Kucheriavenko, Ruslan Fomin, Mykola Perets, Yevhenii Polishchuk, Vadym Sukach, Denys Haiduk, Yelizar Kholomiiev, Vasyl Zaiarniy, Anton Sydorenko, Oleh Vorona, Pavlo Horban, Vitalii Korotkov, Pavlo Kryvda,

⁴⁰ A/HRC/WGEID/130/1, párr. 57.

Ivan Kuzmenko, Yan Klymenko, Yurii Marchenko, Ivan Dovhan, Oleksandr Reshynskiy, Petro Dedushko, Vadym Oleinikov, Stanislav Pererva, Vitalii Holdenko, Ivan Sakov, Denys Maholenets, Viktor Futorian, Serhii Lysov, Andrii Tabakin, Vasyl Boiko, Vladyslav Svirchevskiy, Dmytro Vitkovskiy, Serhii Tamaza, Danylo Chebotarov, Artem Sliepukhin, Oleh Krushovskiy, Eduard Soloviov, Yevhen Uhrin, Oleksandr Hanzheiev, Pavlo Kryvenko, Oleksandr Kushnerenko, Volodymyr Sapun, Serhii Topchyi, Volodymyr Simonov y Oleh Kolodinskyi, que al parecer fueron liberados por la Federación de Rusia y se encuentran en libertad.

Carta de denuncia conjunta

105. El 27 de diciembre de 2023, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, una carta de denuncia relativa a Victoria Roshchyna, una periodista independiente ucraniana que desapareció después del 3 de agosto de 2023 tras haber cruzado la frontera de camino a territorio de Ucrania ocupado por la Federación de Rusia⁴¹.

Arabia Saudita

Procedimiento ordinario

106. El Grupo de Trabajo transmitió al Gobierno, con arreglo a su procedimiento ordinario, un caso relativo a Manahel al-Otaibi, que fue detenida después de presentarse en la comisaría de Al-Sahafa el 16 de noviembre de 2022.

Aplicación de la norma de los seis meses

107. Basándose en la información facilitada por el Gobierno, el Grupo de Trabajo decidió aplicar la norma de los seis meses a tres casos pendientes, con arreglo a sus métodos de trabajo.

Esclarecimiento

108. Basándose en la información facilitada anteriormente por el Gobierno, el Grupo de Trabajo decidió dar por esclarecidos dos casos, tras vencer el plazo prescrito por la norma de los seis meses⁴². Los casos se refieren a Eid Hammoud al-Mashhour al-Howeiti y Sulaiman Mohammed Moussa al-Howeiti, que al parecer están encarcelados.

España

Información facilitada por las fuentes

109. Las fuentes facilitaron información sobre un caso pendiente, pero esa información se consideró insuficiente para darlo por esclarecido.

Suspensión

110. El 15 de noviembre de 2023, las fuentes transmitieron información relativa a un caso, con arreglo a la cual el Grupo de Trabajo decidió suspender el examen del caso de Abel Ballart Sans.

República Árabe Siria

Procedimiento ordinario

111. El Grupo de Trabajo transmitió al Gobierno, con arreglo a su procedimiento ordinario, 11 casos relativos a las siguientes personas:

⁴¹ RUS 29/2023.

⁴² A/HRC/WGEID/130/1, párr. 62.

- a) Una persona que, al parecer, fue detenida el 18 de marzo de 2012 en un puesto de control de la provincia de Aleppo por agentes de las fuerzas de seguridad;
- b) Una persona que fue detenida el 25 de mayo de 2012 en un suburbio del sur de la provincia de Idlib por agentes de las fuerzas de seguridad militar del régimen sirio;
- c) Una persona que fue detenida en 2012 en un puesto de control de la provincia de Damasco por agentes que al parecer pertenecían a las fuerzas de seguridad del régimen sirio;
- d) Una persona que fue detenida en 2012 en un puesto de control de la autopista entre Damasco y Homs por agentes que al parecer pertenecían a las fuerzas de seguridad del régimen sirio;
- e) Una persona que fue detenida en 2014 presuntamente por agentes de la Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea en la delegación de la Dirección en Homs;
- f) Una persona que fue detenida el 8 de enero de 2014 en su domicilio por agentes que al parecer pertenecían a las fuerzas del ejército sirio;
- g) Una persona que fue detenida el 1 de junio de 2011 en las oficinas del Departamento de Inmigración y Pasaportes en Aleppo por agentes que al parecer pertenecían al Servicio de Inteligencia Militar;
- h) Una persona que fue secuestrada el 22 de julio de 2011 en la ciudad de Qumhana y que, al parecer, fue vista por última vez, años después, en la prisión de Sednaya;
- i) Una persona que fue detenida el 15 de marzo de 2013 en un puesto de control de la provincia de Tartus por agentes que al parecer pertenecían a la Dirección General de Inteligencia;
- j) Una persona que fue detenida el 2 de julio de 2013 en su domicilio en Damasco por agentes que al parecer pertenecían a la inteligencia de seguridad del Estado;
- k) Una persona que fue detenida en octubre de 2012 en el campamento de Yarmuk, en el sur de Damasco, por agentes que al parecer pertenecían a las fuerzas del régimen sirio.

Carta de denuncia conjunta

112. El 18 de octubre de 2023, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, una carta de denuncia relativa a la masacre de más de 280 civiles que tuvo lugar en Al-Tadamun (República Árabe Siria) en abril de 2013 y que salió a la luz en 2022, al hecho de que no se haya investigado ni enjuiciado a nadie por esa atrocidad, y a la impunidad de la que siguen gozando los presuntos autores. Al parecer, entre las víctimas de ese suceso había personas que estaban en situación de desaparición forzada o que habían sido detenidas en los puestos de control situados cerca de Al-Tadamun justo antes del 16 de abril de 2013⁴³.

Tayikistán

Aplicación de la norma de los seis meses

113. El Gobierno de Türkiye facilitó información sobre un caso pendiente, de cuyo expediente tenía copia, relativo a un ciudadano turco que desapareció en Tayikistán en el contexto de su traslado transnacional⁴⁴ a Türkiye. Basándose en esa información, el Grupo de Trabajo decidió aplicar al caso la norma de los seis meses, con arreglo a sus métodos de trabajo.

⁴³ SYR 2/2023.

⁴⁴ Véase más información sobre las desapariciones forzadas en el contexto de traslados transnacionales en [A/HRC/48/57](#).

Tailandia

Procedimiento ordinario

114. El Grupo de Trabajo transmitió al Gobierno, con arreglo a su procedimiento ordinario, un caso relativo a Pholachi “Billy” Rakchongcharoen, un activista medioambiental karén de la provincia occidental de Phetchaburi (Tailandia) que fue detenido y sometido a desaparición forzada el 17 de abril de 2014.

Türkiye

Información facilitada por el Gobierno

115. El 5 de septiembre de 2023, el Gobierno transmitió información relativa a seis casos, pero esa información se consideró insuficiente para darlos por esclarecidos.

Carta de solicitud de intervención inmediata

116. El 23 de noviembre de 2023, el Grupo de Trabajo transmitió una carta de solicitud de intervención inmediata relativa a la injerencia arbitraria en el derecho de reunión pacífica de las Madres del Sábado (Cumartesi Anneleri), así como a la detención y reclusión de los participantes en las vigilias que celebran los sábados en la plaza Galatasaray de Estambul.

Carta de denuncia conjunta

117. El 27 de diciembre de 2023, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, una carta de denuncia relativa a la intervención violenta de la policía en las vigilias semanales pacíficas celebradas por las Madres del Sábado en la plaza de Galatasaray, Estambul, y al acoso judicial de los defensores de los derechos humanos que participan en esas vigilias⁴⁵.

Emiratos Árabes Unidos

Procedimiento ordinario

118. El Grupo de Trabajo transmitió al Gobierno, con arreglo a su procedimiento ordinario, un caso relativo a Mansour Hassan Ahmad Abdullah al-Ahmadi, que fue detenido el 5 de junio de 2023 después de presentarse ante la Autoridad Federal de la Identidad, la Nacionalidad, las Aduanas y la Seguridad Portuaria en Abu Dabi.

Información facilitada por las fuentes

119. Las fuentes facilitaron información sobre 11 casos pendientes, pero esa información se consideró insuficiente para darlos por esclarecidos.

Carta de denuncia conjunta

120. El 10 de enero de 2024, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, una carta de denuncia relativa a las nuevas acusaciones presentadas contra 84 de las 133 personas encausadas en 2011 por pedir reformas democráticas. La mayoría de esas personas habían sido condenadas por delitos relacionados con el terrorismo en la causa “UAE 94” (“los 94 de los Emiratos”) y estaban terminando o han terminado recientemente de cumplir su pena. En la carta también se mostraba inquietud por las presuntas irregularidades que se produjeron en el último juicio, el de la causa “UAE 87”, relacionadas con la inobservancia de las garantías de un juicio imparcial y el uso de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes para extraer confesiones. Además, se expresó preocupación por el deterioro del estado de salud de algunas de esas

⁴⁵ TUR 10/2023.

personas durante los años que habían permanecido privadas de libertad y por la reclusión en régimen de incomunicación de al menos 12 de ellas⁴⁶.

Estados Unidos de América

Denuncias generales

121. El Grupo de Trabajo recibió de diversas fuentes información sobre los obstáculos observados en relación con la aplicación en los Estados Unidos de América de la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, en lo que respecta a la desaparición forzada de personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo, entre ellas mujeres, incluidas mujeres embarazadas, niños y personas con discapacidad, que solicitaban protección en los Estados Unidos. La información recabada parece indicar que agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, la Guardia Costera y otros servicios estatales han privado de libertad a personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo, recluyéndolas en régimen de incomunicación durante días, sustrayéndolas de la protección de la ley y negándoles derechos fundamentales, sin que sus familiares, sus representantes legales u otras personas con un interés legítimo tengan acceso a información sobre su suerte o paradero (véase el anexo II).

Venezuela (República Bolivariana de)

Procedimiento urgente

122. El Grupo de Trabajo transmitió al Gobierno, con arreglo a su procedimiento urgente, tres casos relativos a las siguientes personas:

- a) Carlos Jesús Sánchez Vásquez, un coronel del ejército venezolano que presuntamente fue sometido a desaparición forzada el 14 de diciembre de 2023 en Caracas;
- b) Anyelo Julio Heredia Gervacio, un capitán del ejército venezolano que, al parecer, fue detenido por la Guardia Nacional Bolivariana en la zona fronteriza entre Cúcuta (Colombia) y San Antonio del Táchira (República Bolivariana de Venezuela);
- c) Roberto Gazan Abdul-Hadi Casanova, miembro de un partido político de la oposición y con doble nacionalidad venezolana e italiana, detenido y sometido a desaparición forzada el 6 de diciembre de 2023. De conformidad con los métodos de trabajo del Grupo de Trabajo, se remitió una copia del expediente del caso al Gobierno de Italia.

Procedimiento ordinario

123. El Grupo de Trabajo transmitió al Gobierno, con arreglo a su procedimiento ordinario, un caso relativo a Joseph Joel Hernández Ortiz, que presuntamente fue sometido a desaparición forzada el 21 de agosto de 2012 por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.

Esclarecimiento basado en la información facilitada por las fuentes

124. Basándose en la información proporcionada por diversas fuentes, el Grupo de Trabajo decidió dar por esclarecidos seis casos relativos a las siguientes personas:

- a) Julio César Caldera Ávila y Jendré José Caldera Ávila, al parecer reclusos en el Centro de Control y Resguardo del Detenido del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (también conocido como “Zona 7”), ubicado en la zona de Boleíta del municipio de Sucre, en el estado de Miranda;
- b) Daniela Navas, Yexianni Navas y Yexander Josué Caldera Navas, que se encuentran en libertad;

⁴⁶ ARE 1/2024.

c) Roberto Gazan Abdul-Hadi Casanova, recluso por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en Caracas.

Carta de denuncia conjunta

125. El 24 de enero de 2024, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, una carta de denuncia relativa a la reclusión arbitraria y tortura de Hugo Rafael Centeno y Oswil Centeno, la reclusión arbitraria, desaparición forzada y tortura de David José Mosquera Pérez, y las posteriores muertes de Hugo Rafael Centeno y David José Mosquera Pérez⁴⁷.

Yemen

Carta de denuncia conjunta y respuesta

126. El 25 de agosto de 2023, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, una carta de denuncia relativa a la insuficiencia e inadecuación de los mecanismos aplicados por el Gobierno del Yemen para proporcionar un resarcimiento y una reparación plena y efectiva, acordes con la magnitud y gravedad del daño causado, a las víctimas de violaciones manifiestas de los derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas durante el conflicto armado en el Yemen, e investigar y enjuiciar de manera efectiva esas violaciones⁴⁸.

127. Los días 18 y 30 de octubre de 2023, el Gobierno del Yemen respondió a la carta de denuncia conjunta enviada el 25 de agosto de 2023⁴⁹.

Zimbabwe

Carta de denuncia conjunta y respuesta

128. El 18 de octubre de 2023, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, una carta de denuncia relativa al secuestro y posterior desaparición forzada y los malos tratos de que fueron víctimas Womberaiishe Nhende y Sanele Mukuhlani, activistas y miembros del principal partido de la oposición de Zimbabwe, la Coalición Ciudadana por el Cambio. En la carta también se denunciaba la presunta detención y reclusión de Douglas Coltart y Tapiwa Muchineripi⁵⁰, abogados y defensores de los derechos humanos.

129. El 15 de noviembre de 2023, el Gobierno de Zimbabwe respondió a la carta de denuncia conjunta⁵¹. El Grupo de Trabajo acoge con satisfacción la respuesta, pero sigue preocupado por una serie de cuestiones y espera que prosiga el diálogo con el Gobierno.

IV. Información sobre actos equivalentes a desapariciones forzadas atribuibles a agentes no estatales examinados por el Grupo de Trabajo durante el período de sesiones

Libia (autoridades *de facto*)

Procedimiento ordinario

130. El Grupo de Trabajo transmitió al Ejército Nacional Libio, con arreglo a su procedimiento ordinario, un caso relativo a Rabie Bader Aldeen Belkhair, que fue secuestrado el 19 de noviembre de 2013 en Trípoli por milicianos armados que al parecer

⁴⁷ VEN 2/2024.

⁴⁸ YEM 1/2023.

⁴⁹ Véase la respuesta al documento YEM 1/2023.

⁵⁰ ZWE 2/2023.

⁵¹ Véase la respuesta al documento ZWE 2/2023.

pertenecían al Ejército Nacional Libio. De conformidad con sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo transmitió una copia del expediente del caso al Gobierno de Libia.

Esclarecimiento basado en la información facilitada por las fuentes

131. Basándose en la información proporcionada por diversas fuentes, el Grupo de Trabajo decidió dar por esclarecidos dos casos, relativos a Khodr Khaled al-Nabush y Moustafa Mohammad Sharaf, que al parecer fueron liberados por el Ejército Nacional Libio.

Información facilitada por las fuentes

132. Las fuentes facilitaron información sobre un caso pendiente, pero esa información se consideró insuficiente para darlo por esclarecido.

Llamamiento urgente conjunto

133. El 31 de enero de 2023, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, un llamamiento urgente relativo a la ejecución de Al-Mahdi Ibrahim Abdulhamid al-Barghathi, ex Ministro de Defensa del Gobierno de Consenso Nacional, y a la comisión de actos equivalentes a desaparición forzada, con grave riesgo para su vida, contra Abdulaziz Alhasouni Mohammed Imbarak, Ali Mohamed Ali Bukhatwa, Fathi Fouzi Alhasouni Mohammed, Mohammed Faraj Milad al-Baraki, Serag Soliman Saleh Soliman, Younus Salim Younus Abdulaziz y Sanid Sulayman Salih Sulayma cuando estaban presuntamente reclusos por grupos al parecer afiliados al Ejército Nacional Libio⁵².

Estado de Palestina (autoridades *de facto*)

Procedimiento urgente

134. El Grupo de Trabajo transmitió a Hamás, con arreglo a su procedimiento urgente, diez casos relativos a las siguientes personas:

- a) Almog Meir Jan, Evyatar David y Shlomi Ziv, secuestrados el 7 de octubre de 2023 en el festival de música Nova, cerca del kibutz de Reeím, por hombres armados que al parecer pertenecían a Hamás;
- b) Agam Berger, secuestrada el 7 de octubre de 2023 en su domicilio en la base militar de Nahal Oz por hombres armados que al parecer pertenecían a Hamás;
- c) Carmel Gat, secuestrada el 7 de octubre de 2023 en su domicilio del kibutz de Be'eri por hombres armados que al parecer pertenecían a Hamás;
- d) Abraham Munder, Ruth Munder y Karen Munder, secuestrados el 7 de octubre de 2023 en su domicilio del kibutz de Nir Oz por hombres armados que al parecer pertenecían a Hamás;
- e) Ohad Munder Zachri, secuestrado el 7 de octubre de 2023 en su domicilio del kibutz de Nir Oz por hombres armados que al parecer pertenecían a Hamás;
- f) Ohad Yahalomi, secuestrado el 7 de octubre de 2023 en su domicilio del kibutz de Nir Oz por hombres armados que al parecer pertenecían a Hamás;

135. De conformidad con sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo remitió copias de los expedientes de los casos a las autoridades del Estado de Palestina y a los Gobiernos de Francia e Israel.

Procedimiento ordinario

136. El Grupo de Trabajo transmitió a Hamás, con arreglo a su procedimiento ordinario, dos casos relativos a las siguientes personas:

⁵² OTH 2/2024.

a) Doron Steinbrecher, secuestrada el 7 de octubre de 2023 en su domicilio del kibutz de Kfar Aza por hombres armados que al parecer pertenecían a Hamás;

b) Emily Damari, secuestrada el 7 de octubre de 2023 en su domicilio del kibutz de Kfar Aza por hombres armados que al parecer pertenecían a Hamás.

137. De conformidad con los métodos de trabajo del Grupo de Trabajo, se remitieron copias de los expedientes de los casos a las autoridades del Estado de Palestina y al Gobierno de Israel.

Consejo Democrático Sirio (autoridades *de facto*)

Procedimiento ordinario

138. El Grupo de Trabajo transmitió al Consejo Democrático Sirio, con arreglo a su procedimiento ordinario, tres casos relativos a las siguientes personas:

a) Una persona que fue capturada y recluida en enero de 2018 por las Fuerzas Democráticas Sirias en el noreste de la República Árabe Siria;

b) Una persona que fue capturada en Baguz en marzo de 2019 e internada en un centro de reclusión de Al-Hasaka, en el noreste de la República Árabe Siria, que estaba controlado por la Administración Autónoma del Norte y Este de Siria;

c) Una persona que fue capturada en Baguz en marzo de 2019 por las Fuerzas Democráticas Sirias.

Información facilitada por las fuentes

139. Las fuentes facilitaron información sobre cuatro casos pendientes, pero esa información se consideró insuficiente para darlos por esclarecidos.

Yemen (autoridades *de facto*)

Procedimiento ordinario

140. El Grupo de Trabajo transmitió a las autoridades *de facto* de Saná, con arreglo a su procedimiento ordinario, un caso relativo a una persona que fue detenida en un puesto de control de la zona de Asahoul, en el distrito de Al-Mkhadir, por hombres armados que al parecer estaban asociados con las autoridades *de facto* de Saná.

Annex I

Pakistan

Standard procedure

1. Under its standard procedure, the Working Group transmitted 38 cases to the Government, concerning:

(a) An individual who was allegedly abducted in September 2022 from his place of residence in Khyber Pakhtunkhwa province presumably by the local police.

(b) An individual who was allegedly abducted in September 2022 in Karachi presumably by Pakistani State agents;

(c) An individual who was allegedly abducted in December 2016 in Karachi by officials of the Counter-Terrorism Department;

(d) An individual who was allegedly abducted in July 2016 in his home in Khyber Pakhtunkhwa province presumably by Pakistani State agents;

(e) An individual who was allegedly abducted in June 2019 in Balochistan province presumably by officers of the Pakistani military intelligence;

(f) An individual who was allegedly abducted in June 2011 in Karachi presumably by Pakistani State agents;

(g) An individual who was allegedly abducted in July 2023 in Karachi presumably by Pakistani State agents;

(h) An individual who was allegedly abducted in January 2016 in Rawalpindi by Pakistani State Agents;

(i) An individual who was allegedly abducted in February 2022 in Khyber Pakhtunkhwa province by Pakistani State officials;

(j) An individual who was allegedly abducted in October 2014 in his home in Khyber Pakhtunkhwa province presumably by officials of the Counter-Terrorism Department;

(k) An individual who was allegedly abducted in August 2017 from his home in Khyber Pakhtunkhwa province, presumably by officials of the Counter-Terrorism Department;

(l) An individual who was allegedly abducted in July 2010 in a hospital in Khyber Pakhtunkhwa province, presumably by officials of the Counter-Terrorism Department;

(m) An individual who was allegedly abducted in November 2019 from his place of residence in Sindh province by police officials and officers of the Pakistani Rangers;

(n) An individual who was allegedly abducted in May 2015 in Balochistan province by officials of the Frontier Corps;

(o) An individual who was allegedly abducted in May 2015 in Balochistan province presumably by officials of the Frontier Corps;

(p) An individual who was allegedly abducted in April 2015 in Khyber Pakhtunkhwa province by Pakistani State agents;

(q) An individual who was allegedly abducted in April 2015 in Khyber Pakhtunkhwa province by Pakistani State agents;

(r) An individual who was allegedly abducted in June 2015 in Punjab province by Pakistani State agents;

(s) An individual who was allegedly abducted in 2016 in Khyber Pakhtunkhwa province by the Frontier Corps;

- (t) An individual who was allegedly abducted in April 2017 in Khyber Pakhtunkhwa province by Pakistani State agents;
- (u) An individual who was allegedly abducted in January 2015 in Khyber Pakhtunkhwa province by Pakistani State agents;
- (v) An individual who was allegedly abducted in September 2012 in Islamabad by Pakistani State agents;
- (w) An individual who was allegedly abducted on 21 April 2015 in a hotel in Khyber Pakhtunkhwa province by Pakistani State agents;
- (x) An individual who was allegedly arbitrarily detained by members of the People's Aman Committee, and abducted in January 2015 in Khyber Pakhtunkhwa province by Frontier Corps;
- (y) An individual who was allegedly arbitrarily detained by members of the People's Aman Committee, and abducted in January 2015 in Khyber Pakhtunkhwa province by the Frontier Corps;
- (z) An individual who was allegedly abducted in June 2012 in Peshawar, Khyber Pakhtunkhwa province, by local police officers;
- (aa) An individual who was allegedly arbitrarily detained in 2015 in Peshawar, Khyber Pakhtunkhwa province, by Pakistani State officials;
- (bb) An individual who was allegedly abducted in May 2011 in Khyber Pakhtunkhwa province presumably by Pakistani State agents;
- (cc) An individual who was allegedly abducted in November 2014 in Punjab province by Pakistani State agents;
- (dd) An individual who was allegedly abducted in July 2018 from their place of residence in Sindh province presumably by Pakistani State agents;
- (ee) An individual who was allegedly abducted in June 2022 in Karachi presumably by Pakistani State agents;
- (ff) An individual who was allegedly abducted in November 2022 near his place of residence in Khyber Pakhtunkhwa province presumably by Pakistani State agents;
- (gg) An individual who was allegedly abducted in March 2017 in a restaurant in Punjab province presumably by Pakistani State agents;
- (hh) An individual who was allegedly abducted in January 2017 in his place of residence in Khyber Pakhtunkhwa province by officers of the Counter-Terrorism Department;
- (ii) An individual who was allegedly abducted in February 2023 in his home in Punjab province by officers of the Elite Force;
- (jj) An individual who was allegedly abducted in September 2016 Khyber Pakhtunkhwa province presumably by Pakistani State agents;
- (kk) An individual who was allegedly abducted in August 2016 in his place of residence in Khyber Pakhtunkhwa province by Pakistani State forces;
- (ll) An individual who was allegedly abducted in August 2021 in Punjab province presumably by Pakistani State agents.

Annex II

General Allegations

Brazil

The Working Group received information from sources concerning alleged violations and obstacles encountered in the implementation of the Declaration on the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (hereafter, ‘the Declaration’) in Brazil.

1. This general allegation focuses on enforced disappearances commenced during the military dictatorship, between 1964 and 1985; as well as on those that began after the establishment of democracy in Brazil. We would also like to refer to the two general allegations sent in 2019 and 2022 respectively to your Excellency’s Government, for which we are yet to receive replies. We would also like to further call your Excellency’s Government attention to the Committee on Enforced Disappearances Concluding observations on the report submitted by Brazil under article 29 (1) of the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearances, in particular paragraphs 13, 15 and 23 (CED/C/BRA/CO/1) and Report on follow-up to the concluding observations (CED/C/24/2).

Enforced disappearances began during the military dictatorship

2. It is alleged that the Brazilian State is yet to take full and effective measures to address the serious human rights violations committed during the dictatorship, despite several measures adopted over the years.

3. According to the information received, the first ‘death squads’ formed by civil and military police were established in the 1950s, having significantly expanded their repressive activities, including the perpetration of enforced disappearance during the military dictatorship. It is further alleged that, during the dictatorship, summary executions followed by concealment of the corpses became a systematic practice of the State to combat politically organized opposition.

4. One emblematic example of such practice was the case of the police officer Cláudio Guerra, who was convicted in June 2023 of the concealment of 12 bodies of political opponents forcibly disappeared during the military dictatorship. In the verdict, the Brazilian judiciary – 2ª Vara Federal de Campos de Goytacazes, Seção Judiciária do Rio de Janeiro¹ – recognized the imprescriptible nature of crimes against humanity and the non-applicability of the 6683/1979 Amnesty Law. However, such ruling is rather exceptional as, according to the information received, the overwhelming majority of the judiciary continues to apply the 1979 Amnesty Law and thus impunity continues to prevail for gross human rights violations, including enforced disappearances, committed during the military dictatorship. It is further alleged that legal proceedings that seek the recognition of the unconstitutionality of 1979 Amnesty Law (Actions for non-compliance with fundamental precepts/Ações de Descumprimento de Preceito Fundamental, numbers 153 and 320) are still pending before the Federal Supreme Court for discussion and resolution.

5. According to the information received, Law No. 9140/95 was one of the first attempts by the State to deal with the violations committed during the dictatorship, having established the Special Commission on Political Deaths and Disappearances (hereafter, ‘SCPDD’ or ‘the Commission’). However, it is alleged that the law was at odds with international legal standards, as it established the figure of ‘political disappearance’, applicable only to those whose disappearance was connected to their political activities and whose relatives were able to establish their militant status. As a result, the legislation concerned excluded all other victims of enforced disappearance for reasons other than political. This has led to inaction of

¹ <https://static.poder360.com.br/2023/06/sentenca-claudio-guerra-ditadura.pdf>.

State bodies aimed at the implementation of the rights to memory, truth, justice and reparation, in particular in relation to certain social groups, namely rural and urban workers, indigenous people, the LGBTI population, the residents of *favela* and the Afro-Brazilians. Although these groups were widely affected by the dictatorial violence, including through the practice of enforced disappearance, as the corresponding cases were not classified as ‘political disappearances’, they remained excluded from the transitional justice process and their claims for truth, justice, memory and guarantees of non-repetition remain unanswered.

6. It is further reported that the prevailing official narrative of events fails to fully recognize the role played, and the violations suffered by, historically disadvantaged groups, such as Afro-Brazilians and indigenous peoples, in the struggle against the dictatorial regime. According to the sources, the SCPDD book (report) on right to truth and memory does not specifically offer an analysis through the lenses of such groups.² While a subsequent publication was specifically devoted to the Afro-Brazilians,³ the struggle of indigenous peoples remains unacknowledged. Further to this, the current school curricula remain silent on the contributions of such groups to the fight against dictatorship in Brazil.

7. It is alleged that, during Jair Bolsonaro’s Government (2019-2022), the SCPDD⁴ was subject to a series of changes, including the replacement of a large part of its former members with people linked to the Armed Forces or without any track-record in defending human rights. Further to this, at the beginning of 2020, a change in the Commission’s regulations made the search for disappeared people conditional on the expression of interest by the family, contradicting the international obligation of States to act *ex officio* in these cases. Finally, in the last month of the Bolsonaro Government, SCPDD was terminated without having fully completed its mandate to address the crimes committed during the dictatorship, including enforced disappearance.

8. According to the sources one of the last measures adopted to deal with the human rights violations committed during the dictatorship was the establishment of the National Truth Commission (NTC) in 2011. However, it is alleged that the NTC made little progress due to lack of cooperation from the Armed Forces. It is further alleged that the NTC recommendation to establish a permanent body with the task of following up on its actions and recommendations, including the continuation of activities aimed at locating, identifying and handing over to the families the remains of disappeared persons (limiting the interpretation of the notion to that of persons “disappeared for political reasons), have not been implemented to date.

Enforced disappearances in democracy

9. According to information received, in 1990, 11 young residents of the Acari *favela* in Rio de Janeiro, including minors, were forcibly disappeared by the military police in what become known, at least publicly, as the first case of enforced disappearance reported during democracy. Their fate and whereabouts remain unknown to date and the families’ quest for truth, justice and reparation has gone unanswered. Further to this, two relatives of the disappeared persons, including a leading figure of the so-called “Acari Mothers” group – established to fight against institutional violence – were summarily executed on 15 May 1993, allegedly by police officers involved in the Acari enforced disappearances.⁵

10. According to information received, currently, enforced disappearances continue being perpetrated mostly under the justification of “war on crime” and “war on drug” targeting

² See: *Direito à verdade e à memória: Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos / Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos* Brasília: Secretaria Especial dos Direitos Humanos, 2007, ISBN 978-85-60877-00-3, available here: http://www.dhnet.org.br/dados/livros/a_pdf/livro_memoria1_direito_verdade.pdf.

³ Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, *Direito à Memória e à Verdade: aos descendentes de homens e mulheres que cruzaram o oceano a bordo de navios negreiros e foram mortos na luta contra o regime militar*, 2009, available: <https://siac.fpabramo.org.br/searchAcao/40>.

⁴ Please note that the Working Group addressed your Excellency’s Government with the reference to SCPDD in its 2019 General Allegation.

⁵ CIDH, Relatório N° 100/21, Caso 13.691. Admissibilidade e Mérito Cristiane Leite de Souza e outros. Brasil. 20 de maio de 2021.

disproportionally Afro-Brazilians from impoverished communities in the *favelas*. One example is that of Mr. Amarildo de Souza who was forcibly disappeared, in July 2013, after having been taken for investigation by the Rio de Janeiro military police from the *Rocinha favela*, in the context of the so-called “Operation Armada Peace” aimed to combat drug trafficking. His family is yet to learn the truth about his fate and whereabouts and to be awarded any form of reparation, and those who were initially convicted for the crime continue working for the Rio de Janeiro military police.

11. According to the Brazilian Public Security Forum, between 2017 and 2019, an average of 183 persons have gone missing per day in Brazil, of which 62.8% are male and 54.3% black.⁶ It is further reported that, between 2003 and 2021, 1.2 million people were registered as missing in the State of Rio de Janeiro alone, of which 64% were male and 70% black. It is however not possible to disaggregate the missing from those who were forcibly disappeared. This is mainly due to the lack of full implementation and operationalization of Law No. 13.812/2019, which establishes the National Policy for the Search for Missing Persons and the National Registry of Missing Persons, entrusted upon the responsibility for the registration and search of the missing, including those forcibly disappeared.

12. The Working Group has also been informed that many of the obstacles concerning enforced disappearance stem from the fact that Brazil is yet to criminalize enforced disappearance as an autonomous crime. The process of adoption of legislation for domestic criminalization of enforced disappearance started in 2011 and is yet to be concluded. It currently awaits placement in the agenda of the Legislative House.

13. The Working Group would like to bring to the attention of the Government of Brazil articles 2, 3, 4, 10 (3), 13, 17, 18, and 19 of the Declaration, which are directly related to the present allegations.

14. Moreover, the Working Group would like to bring to the attention of your Excellency’s Government the thematic study on reparations and enforced disappearances, in particular the obligation to provide redress which includes the guarantees of non-repetition and satisfaction as well as the standards and public policies for an effective investigation of enforced disappearances, in particular the State obligation to investigate enforced disappearances. The Working Group would like to further call your attention to the study on enforced or involuntary disappearance and economic, social and cultural rights; study on best practices on enforced disappearances in domestic criminal legislation; general comment on the right to truth in relation to enforced disappearance and Guiding principles for the search of the disappeared.

15. The Working Group would be grateful for the cooperation and any information that Your Excellency’s Government can provide on the following questions:

(a) Please provide additional information or comments regarding the allegations mentioned herein.

(b) Please provide information on the efforts made by your Excellency’s Government to ensure the rights to memory, truth, justice, reparation and guarantees of non-recurrence for the enforced disappearances began during the dictatorship. In particular on the efforts made:

(i) to ensure that the 1979 amnesty law is not applied by the judiciary to hinder the access to justice and accountability. Please also provide information on the status of actions 153 and 320 pending before the Federal Supreme Court.

(ii) to address the deficiencies of law 9140/95, in particular the restrictive definition of victims of enforced disappearance enshrined therein. Please also provide information on the implementation of the rights to memory, truth, justice and reparation to all victims of enforced disappearances during the dictatorship, regardless of their political affiliation. Please provide any information on the reform of the school

⁶ See: FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. *Mapa dos desaparecidos no Brasil*. São Paulo: Fórum Brasileiro de Segurança Pública, May 2023, available at: <https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2023/05/mapa-dos-desaparecidos-relatorio.pdf>.

curricula to ensure that the narrative of the events is inclusive and recognizes the contributions and the struggles of historically disadvantaged groups in the fight against dictatorship.

(iii) to ensure the reinstatement of the SCPDD and to ensure that it fully complies with its mandate, as well as the measure taken to ensure the right to participation of the victims in the process.

(iv) to implement the recommendations by National Truth Commission, namely the establishment of a permanent task force with the view of addressing the human rights violations, including enforced disappearances, committed during the dictatorship.

(c) Please provide information on the measures taken to ensure the rights to truth, justice, memory and reparation for the victims of enforced disappearance in the *Acari favela*. Please provide information on the measures taken to criminally prosecute those responsible for the enforced disappearances and arbitrary executions concerned.

(d) Please provide any information on measures taken to protect vulnerable and historically disadvantaged groups, such as Afro-Brazilians from going missing or being forcibly disappeared. Please provide information to the measures taken to ensure compliance with the rights to truth, justice, reparation to Mr. Amarildo de Souza's family.

(e) Please provide information on the efforts made to implement and operationalize Law 13.812/2019. In particular:

(f) Whether clear parameters were established for the production of data and public information on the phenomenon of enforced disappearance and on the existence of disaggregated data by sex, age, nationality, place of origin and racial or ethnic origin.

(g) Please also provide any information available on the State authorities responsible for the implementation of Law 13.812 and the existing cooperation mechanisms amongst the different State institutions;

(h) On the accessibility of the mechanisms to the general population and the ways in which cases are presented before the concerned authorities and the remedies provided in case of denial to file a claim.

(i) Please provide any updates on the domestic efforts to criminalize enforced disappearance as an autonomous crime, including any prospect for the Legislative House to include in its agenda the discussion on the draft law on the criminalization of enforced disappearance.

16. The Working Group requests your Excellency's Government to provide a response to the above questions within 60 days. The text of the general allegation will be published along with the Working Group's post-session report and on its website, where also any response received by your Government will be uploaded.

China

The Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances received information from credible sources concerning reported obstacles encountered in the implementation of the Declaration on the Protection of All Persons from Enforced Disappearance ('the Declaration') in the People's Republic of China. In particular, certain forms of deprivation of liberty under the national criminal system seem to have the constitutive elements of an enforced disappearance.

1. Sources reported the ongoing use of the 'Residential Surveillance at a Designated Location' ('RSDL') and the *Liuzhi* detention, to deprive persons of their liberty in conditions of prolonged incommunicado detention in conditions tantamount to an enforced disappearance. The Working Group has received renewed concerns and in view of this stresses its calls previously addressed to your Excellency's Government in a General

Allegation,⁷ as well as in other Special Procedures communications,⁸ to review the conditions of:

(a) The RSDL, which came into effect in 2013 in the revised Criminal Procedure Law, providing the legal grounds for the holding of persons in custody for up to six months without disclosure of their whereabouts or access to lawyers and/or persons with legitimate interest. According to the information received, RSDL detention is being used in particular to curtail civil liberties by targeting human rights defenders, lawyers, civil society and political activist.

(b) The *Liuzhi* detention, which has been in operation since 2018 as a disciplinary measure within the Chinese Communist Party's (CCP) structures and is used to specifically punish any public servant or member of the CCP who are alleged to 'violate duties' or commit 'economic crimes', and against those working within academia, State-owned enterprises, State media, local contractors, or anyone related to any of the above.

2. The Working Group was informed that persons deprived of their liberty under the RSLD and *Liuzhi* systems are held in unofficial facilities, chosen at the discretion of the police or national security officers. In addition, detainees are kept isolated in solitary confinement and incommunicado detention for prolonged periods, where they face a heightened risk of ill-treatment. According to the information received, authorities do not disclose the whereabouts of the detainees and therefore persons with a legitimate interest, i.e., family members or lawyers of those detained are not granted information on their loved ones' fate, whereabouts and state of health. Furthermore, according to the information received, the detainees' rights to access legal counsel of choice or options to appeal the measure are withheld. Such conditions of detention place individuals outside the protection of the law, which is an inherent consequence of an enforced disappearance.

3. Official data disclosed by your Excellency's Government acknowledge the use of RSDL in some 23,700 instances. However, information the Working Group has received estimate that for the period 2013 to 2021, the figure is closer to 85,000. There is also an alleged progressive increase in the use of the two detention systems since their introduction - according to current estimations at least 104,492 people have been subjected to deprivation of liberty under the RSLD and *Liuzhi* systems (47,291 into RSDL and 57,201 into *Liuzhi*).

4. Since 2017, the Working Group has consistently continued to receive and raise with your Excellency's Government the alarming information about the prolonged incommunicado detention in "Vocational Education and Training Centres" (VETC), camps and facilities in the Xinjiang Uyghur Autonomous Region ('XUAR', or Uyghur Region), of Uyghurs and Turkic Muslims.⁹ Sources reported that referrals to these facilities, whether for criminal or administrative reasons, occur without proper due process. Moreover, the sentencing lacks transparency, and detainees are held for an indeterminate period. According to information received, detainees in XUAR face a heightened risk of being subjected to forced labour, torture and other ill-treatment. The Working Group is seriously concerned that the detention regime in VETC facilities has no basis in international law and, particularly, in the Declaration.

5. The Working Group has also registered the concerns from reliable sources regarding an alarmingly high number of extraterritorial abductions and transnational transfers (involving arbitrary deprivations of liberty and renditions) from the Mekong region and neighbouring countries of persons who end up in secret detention or other forms of deprivation of liberty. Moreover, information shared with the Working Group demonstrates a systemic pattern pursuant to which such practices are designed to pressure and to control dissenting groups seeking protection abroad, including people belonging to ethnic and religious minorities, political dissidents, human rights defenders, journalists, refugees, and asylum seekers.

⁷ See 115th Session [General Allegation](#) (2018); 119th Session [General Allegation](#) (2019).

⁸ See [OL CHN 15/2018](#), [UA CHN 3/2017](#).

⁹ See [A/HRC/39/46](#), para 88; [A/HRC/42/40](#), para 69; [A/HRC/45/13](#), para 46; [A/HRC/48/57](#), para 71; [A/HRC/51/31](#), para 48; [A/HRC/54/22](#), para 68.

6. The Working Group was informed that individuals whose family members allegedly are or were forcibly disappeared by Chinese authorities and believed to be detained in the XUAR have no effective remedy at their disposal to establish the fate and whereabouts of their loved ones. They reportedly rarely receive official confirmation regarding their family member's status, and efforts to gather information have been largely unsuccessful. Very few detainees are allowed contact with the outside world, and even nominally 'free' Uyghurs living in XUAR have been effectively forbidden to speak with their family or friends abroad. Pursuant to the information received by the Working Group, Uyghurs, both in the country and overseas, are consistently deprived of their right to free speech, as well as their freedom to seek, receive and impart information and their right to know the truth about the fate and whereabouts of their loved ones.

7. The Working Group would like to bring to the Government's attention articles 2, 3, 8, 9, 10 to 13 and 19 of the Declaration, which are directly related to the present allegations.

8. The Working Group would be grateful for your Excellency's Government cooperation and observations on the following questions:

(a) Please provide any additional information and any comment on the allegations mentioned above.

(b) Please provide information on the measures implemented by your Excellency's Government to safeguard the civil and political rights of ethnic minorities, human rights defenders, and political activists. Please elucidate how these efforts align with international human rights law and ensure the respectful treatment of these individuals.

(c) Please provide information on how your Excellency's Government ensures that families can realise their right to know the truth about the fate and whereabouts of their family members who are deprived of their liberty pursuant to Article 10 of the Declaration and what steps your Excellency's Government is putting in place to ensure that information about the fate and whereabouts of persons deprived of their liberty and access to their loved ones, as well as to a legal counsel of choice are guaranteed.

(d) Please illustrate the applicable procedures for the arrest, deportation and deprivation of liberty of nationals residing in third countries and how your Excellency's Government ensures they are compatible with international legal obligations. In particular, provide information on the protective measures put in place when deportation and return processes concern human rights defenders, political activists, ethnic minorities, and refugees who seek asylum in neighbouring countries.

(e) Please provide information on how your Excellency's Government ensures that the family members of individuals living overseas have the right to communicate with their relatives who are deprived of liberty without fear of threats and reprisals.

9. The Working Group requests your Excellency's Government to provide a response to the above questions within 60 days. The text of the general allegation will be published along with the Working Group's post-session report and on its website, where also any response received by your Excellency's Government will be uploaded.

Iraq

The Working Group received information from the sources concerning obstacles encountered in the implementation of the Declaration on the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (hereafter, 'the Declaration') in Iraq.

1. The Working Group received allegations concerning the draft law on missing persons (hereafter, 'the draft law') shared by the Office of the Iraqi Prime Minister to the Iraqi House of Representatives in 2023. According to the information received, the draft law fails to codify enforced disappearances as an autonomous crime, which is the responsibility of Iraq under the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearances (hereafter, 'the Convention'), ratified by Iraq in 2010.

2. Sources informed the Working Group that the draft law defines missing persons as someone who went missing, with whom contact is lost, and whose fate is unknown. Thus, the draft law does not implement the definition of enforced disappearances as provided in the Declaration and in Article 2 of the Convention. The Committee on Enforced Disappearances (hereafter, ‘the Committee’) has already previously recommended the Iraqi authorities to incorporate the offense of enforced disappearances into domestic criminal legislation as an autonomous offence (CED/C/IRQ/OAI/1).

3. According to the unofficial translation of the draft law provided to the Working Group, the aims of the draft law mentioned in Article 4 are of a purely humanitarian nature, i.e. to: (1) reduce the number of missing persons, (2) provide assistance for missing persons, (3) facilitate procedures establishing the truth of missing persons, (4) simplify the procedures of receiving reports and disclosing information, and (5) enhance awareness, assisting families in submitting reports, as well as setting up mechanisms to provide redress. While the Working Group supports such efforts, in case the persons went missing as the result of an enforced disappearance, State authorities are also under obligations to prevent these violations, conduct an investigation, prosecute perpetrators, and provide reparation to victims.

4. The draft law foresees the establishment of a Supreme National Commission on Missing Persons (hereafter, ‘the Commission’). However, there are several shortcomings in the design of the Commission, including:

(a) its independence and confidentiality are not sufficiently secured, which is of crucial importance to protect victims and the information provided by them,

(b) it does not have investigative powers,

(c) it is unclear how the Commission will interact with law enforcement, other Government and international agencies, and the judiciary,

(d) participation of victims in the Commission’s work and procedures is not secured.

5. Sources have informed the Working Group that the draft law has not been adopted yet, but there is confusion around its status, even within the House of Representatives. This affects the families of missing and forcibly disappeared persons negatively, as they do not know what to expect. Importantly, families should be included in the design of the law, as well as in its implementation, so that their needs can be addressed.

6. As such, the draft law as reported to the Working Group by sources is in blatant contradiction with the recommendations received by Iraq from the, which conducted a visit to Iraq in November 2022 (CED/C/IRQ/VR/1). Among the priority recommendations were establishing and implementing the basis for effective searches and investigations (paras. 3–22) and measures to eradicate impunity (paras. 23–36).

7. The Working Group is further concerned by statements of governmental officials in the process. According to information received, in August 2023, the Human Rights Advisor to the Prime Minister announced at the Dialogue Forum on Disappearances in the House of Representatives that there was not a single case of enforced disappearance in the country. However, there are currently 16,428¹⁰ unresolved cases concerning Iraqi authorities that the Working Group is dealing with under its humanitarian mandate, as well as 575¹¹ unresolved cases by the Committee. This is only the number of disappearances that were brought to the attention of the Working Group and the Committee – the actual number of enforced disappearances is most likely much higher.

8. The Working Group would like to bring to the Government’s attention articles 3, 4, 5, 13, 16 and 19 of the Declaration, which are directly related to the present allegation.

9. Moreover, the Working Group would like to bring to the attention of your Excellency’s Government the Guiding Principles for the Search for Disappeared Persons and, in particular, in Principle 5 (the search should respect the right to participation), Principle 13

¹⁰ See A/HRC/54/22.

¹¹ See A/78/56.

(the search and the criminal investigation should be interrelated) and Principle 15 (the search should be independent and impartial).

10. The Working Group would be grateful for your Excellency's Government cooperation and observations on the following questions:

(a) Please provide any additional information, any comment you may have on the above-mentioned allegations, as well as information on the official status of the draft law.

(b) Please provide information on any legislative initiative or practical measures that would lead to investigations and to prosecution of perpetrators of enforced disappearances.

(c) Please provide information on steps taken to ensure the families right to participation, as well as the involvement of victims' associations in the process of drafting laws and procedures addressing missing persons and enforced disappearances, including in the draft law.

(d) Please provide information on initiatives leading to providing redress and compensation to victims of enforced disappearance.

(e) Please provide information on how the authorities plan to incorporate the autonomous crime of enforced disappearance into domestic law.

11. The Working Group requests your Excellency's Government to provide a response to the above questions within 60 days. The text of the general allegation will be published along with the Working Group's post-session report and on its website, where also any response received by your Government will be uploaded.

Libya

The Working Group received information from the sources concerning obstacles encountered in the implementation of the Declaration on the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (hereafter, 'the Declaration') in Libya.

1. The Working Group received alarming allegations related to the arbitrary deprivation of liberty and enforced disappearance of migrants, refugees and asylum-seekers in Libya, including women, children (often unaccompanied), and disabled persons. The information gathered suggests that the mentioned violations take place either in clandestine detention centres, or in official detention centres in Libya managed by the Libyan Directorate to Combat Illegal Migration, including the centres of Abu Salim and Ain Zara. In both cases, persons deprived of their liberty are reportedly subjected to abuses and torture and placed outside the protection of the law, while there do not seem to be effective remedies to ensure that perpetrators are held accountable and that victims obtain redress.

2. According to the information received by the Working Group, migrants, refugees and asylum-seekers arrested in urban settings or intercepted at sea in their attempts to leave Libya, are deprived of their liberty and frequently held captive for months in clandestine detention centres (including private buildings, hangars or warehouses) by militias or other armed groups, acting with the direct or indirect support of the State. The people held captive in these circumstances, which amount to secret detention, are placed outside the protection of the law and deprived of the possibility to exercise any of their fundamental rights.

3. In other cases, upon detention, migrants, asylum-seekers and refugees are brought to officially recognised detention centres managed by the Libyan Directorate to Combat Illegal Migration across Libya, five of which are located in Tripoli. Pursuant to data confirmed also by the International Organization for Migration and the United Nations High Commissioner for Refugees, around 75% of the more than 3000 people held in these facilities would be in the five detention centres located in Tripoli.

4. However, sources informed that the official registers and records of persons deprived of liberty of the said detention centres are not complete nor up-to-date and access to them would be extremely difficult. The situation is reportedly worsened by the fact that, according to the information received, upon arrest or transfer to the detention centre, detainees would

be routinely stripped of their documents and personal belongings (including mobile phones). This practice jeopardises the compilation and maintenance of accurate data on all persons deprived of their liberty and makes contact with the outside world virtually impossible. At the same time, when any person with a legitimate interest seeks to have access to information on persons held in the said detention centres, the lack of accurate registration or incomplete data further complicates the determination of their fate and whereabouts.

5. According to the information received, persons deprived of their liberty in official and unofficial detention centres are usually not enabled to communicate with, and be visited by, their families, counsel or any other person of choice, or consular authorities. With regard to official detention centres in particular, the Working Group has learned that, albeit those held there are foreigners, only a few embassies of the countries of origin are accessing the facilities to provide consular services to their nationals. In general, as it will be further detailed below, access of civil society organisations to these detentions sites is severely restricted.

6. Sources informed the Working Group that persons placed in both official and unofficial detention centres are subjected to inhumane living conditions, including chronic overcrowding, poor sanitation and lack of basic hygiene, insufficient access to healthcare, inadequate food and inconsistent access to clean water and no possibility for infection prevention measures. Reportedly, women, including pregnant and lactating, children, including unaccompanied and new-borns, are held in conditions that are especially detrimental to their physical and mental health. According to the information received, the circumstances described, the lack of contact with the outside world and the indefinite duration of their detention cause serious psychological damage to the persons concerned.

7. Moreover, the Working Group was informed that persons placed in official and unofficial detention centres are frequently subjected to abuses and gross human rights violations, including torture, forced labour and sexual violence. Reportedly, even in cases where migrants held in official or unacknowledged detention sites eventually regain their freedom, they face long-lasting consequences for the harm suffered, including post-traumatic stress disorder. According to the sources, the Government does not offer any effective remedy or programme of psychosocial support to address the described situations.

8. The Working Group learned that, in some instances, the conditions or the abuses referred to in the previous paragraph, have led to the death of persons deprived of their liberty in both official and unofficial detention centres. However, when this happened, no accurate investigations and forensic examinations were carried out to ascertain and record the circumstances and cause of death and the destination of the remains, thus hampering the right to know the truth of relatives of these persons. It is equally unclear whether authorities undertake any measures to preserve the mortal remains and to facilitate their subsequent identification and return to the countries of origin.

9. Furthermore, sources informed that civil society organisations aiming at monitoring conditions of detention and assisting persons held captive in facilities managed by the Libyan Directorate to Combat Illegal Migration experienced hindrances in their activities and are often denied access to the detention centres. The reported situation further isolates persons deprived of their liberty and exposes them to the risk of enforced disappearance.

10. The Working Group was informed that, reportedly, persons held in the said detention centres would not be enabled to bring proceedings before competent authorities to determine whether their deprivation of liberty is lawful and, when authorities decide to transfer or expel or extradite them, they would be unable to challenge in any ways such decisions, including when they may amount to a violation of the principle of *non-refoulement* and expose them to the danger of enforced disappearance.

11. Finally, according to information received by the Working Group, there are no instances of investigations on the above-mentioned circumstances and abuses, which are reportedly covered by impunity and there would not be any effective remedy available to obtain redress for the harm suffered in the detention centres concerned.

12. The Working Group would like to bring to the Government's attention articles 3, 9, 10 to 13 and 19, of the Declaration, which are directly related to the present allegations.

13. Moreover, the Working Group would like to bring to the attention of your Excellency's Government the obligations spelled out in its thematic report on enforced disappearances in the context of migration, as well as in the Guiding Principles for the Search for Disappeared Persons and, in particular, in Principles 4 and 9, which respectively establish that the search should follow a differential approach, especially when women, girls and children are concerned, and should take into account the particular vulnerability of migrants. We recall also the general comments on women affected by enforced disappearances and on children and enforced disappearances.

14. The Working Group would be grateful for your Excellency's Government cooperation and observations on the following questions:

(a) Please provide any additional information and any comment you may have on the above-mentioned allegations.

(b) Please provide detailed information on the measures taken to uphold the prohibition of secret detention and to carry out investigation into the allegations of the existence of clandestine detention centres where migrants, refugees and asylum-seekers are held across the country, to locate such centres and free and assist all those arbitrarily held there, and to identify the persons who set up and run these facilities, prosecute and hold them accountable.

(c) Please provide detailed information on the legal grounds for indefinitely depriving the liberty of migrants, asylum-seekers and refugees and holding them in facilities managed by the Libyan Directorate to Combat Illegal Migration without access to due process rights.

(d) Please provide detailed information on whether official up-to-date registers of all persons deprived of their liberty in detention centres managed by the Libyan Directorate to Combat Illegal Migration are maintained and, on the measures, taken to ensure that relatives of persons deprived of their liberty, their counsel or any other person having legitimate interest have access to the information contained in such registers.

15. Please provide information on the measures adopted to ensure that any person deprived of liberty held in facilities managed by the Libyan Directorate to Combat Illegal Migration is authorised to communicate with, and be visited by, his or her family, counsel or any other person of choice, including consular authorities.

16. Please provide detailed information on the measures adopted to ensure that those held in facilities managed by the Libyan Directorate to Combat Illegal Migration live in humane conditions and have access to medical assistance and care, food and clean water. Moreover, kindly inform on the measures taken to ensure that they are not subjected to abuses and gross human rights violations, including torture, sexual violence and forced labour and that allegations in this regard are subjected to prompt, independent, impartial, thorough and effective investigations and those responsible are prosecuted and sanctioned.

17. Please provide detailed information on the measures taken when a person held in one of the detention facilities managed by the Libyan Directorate to Combat Illegal Migration dies to determine and register the circumstances and cause of death, and the mark of the place where the mortal remains are buried.

18. Please provide detailed information on the measures adopted to ensure that civil society organisations aiming at assisting persons deprived of their liberty in facilities managed by the Libyan Directorate to Combat Illegal Migration are regularly granted access to the detention centres and that their activities are not subjected to arbitrary or unlawful interferences and restrictions.

19. Please provide detailed information on the measures adopted to ensure that persons deprived of their liberty in facilities managed by the Libyan Directorate to Combat Illegal Migration are entitled to take proceedings without delay before a court to determine the lawfulness of their deprivation of liberty and to challenge decisions of transfer, expulsion or extradition that may expose them to the danger of enforced disappearance, in contravention of the principle of *non-refoulement*.

20. Please provide detailed information on how your Government ensures that any person having knowledge or legitimate interest, who alleges that a person has been subjected to enforced disappearance is able to lodge a complaint to a competent and independent State authority. Furthermore, please inform on how your Excellency's Government ensures that enforced disappearances are promptly, thoroughly and impartially investigated, even if there has been no formal complaint.

21. Please provide information on the measures taken to guarantee that any person who commits, orders, solicits or induces the commission of, attempts to commit, is an accomplice to, or participates in, an enforced disappearance, is held criminally responsible.

22. Please provide detailed information on the measures taken to cooperate with other States, including the States of origin, transit or destination of migrants, refugees and asylum-seekers, in searching for, locating and releasing disappeared persons and, in the event of death, in exhuming and identifying them and respecting and returning their remains. In particular, kindly provide information on the measures taken to ensure that foreigner persons deprived of their liberty in Libya are allowed to communicate with their consular authorities.

23. Please provide information on the measures taken to search and find disappeared persons – in particular migrants, refugees and asylum-seekers – in line with the Guiding Principles for the Search for Disappeared Persons.

24. Please provide detailed information on the applicable legislation and the measures undertaken to ensure that any victim of enforced disappearance (thus including the disappeared person and any other person having suffered a direct harm) obtains adequate compensation and integral reparation, including measures of rehabilitation and satisfaction, for the harm suffered.

25. The Working Group requests your Excellency's Government to provide a response to the above questions within 60 days. The text of the general allegation will be published along with the Working Group's post-session report and on its website, where also any response received by your Government will be uploaded.

United States of America

The Working Group received information from sources concerning obstacles encountered in the implementation of the Declaration on the Protection of all Persons from Enforced Disappearance (hereafter, 'the Declaration') in the United States of America.

1. The Working Group received alarming allegations related to enforced disappearance of migrants, refugees, and asylum-seekers, including women, pregnant women and children, and disabled persons seeking protection in the United States of America. The information gathered suggests that Customs and Border Protection (CBP), the U.S. Coast Guard, and other State agents have deprived migrants, refugees, and asylum-seekers of their liberty, subjecting them in *incommunicado* detention for days, placing them outside of the protection of the law and depriving them of fundamental rights, without ensuring that families, legal representatives or others persons with a legitimate interest have access to information about their fate or whereabouts. Notably, a deprivation of liberty followed by a refusal to acknowledge it or by concealment of the fate or whereabouts of the disappeared person, which place such a person outside the protection of the law, regardless of the duration of the said deprivation of liberty or concealment, amounts to enforced disappearance.

Allegations of Enforced Disappearance by Customs and Border Protection

2. According to sources, in April 2023, the United States Government implemented new policies to facilitate the expedited removal of individuals detained by CBP agents. Under these new policies, immigration officials begun to conduct screenings of asylum-seekers in CBP custody, known as 'credible fear interviews' (hereafter, CFIs). The purpose of the CFIs is to determine if the asylum-seeker has a credible fear of returning to their country of origin.

3. The Working Group received information that CBP has no system for family members or legal representatives to locate or identify individuals held in custody by CBP. Additionally, CBP does not permit visits by legal representatives or family visits to detention centers. The absence of a system, according to sources, makes contact with the outside world virtually impossible, prevents persons with a legitimate interest from accessing information about migrants, refugees, and asylum-seekers in detention, and further impedes the determination of their fate and whereabouts.

4. At the same time, according to the information submitted to the Working Group, individuals held *incommunicado* must frequently persuade officials that they have a viable asylum claim, often without the assistance of an attorney or family members. Pursuant to the new policies, asylum-seekers must demonstrate a “significant possibility” that their asylum claim will be successful before an immigration judge to avoid immediate deportation while in CBP custody. Deportation may expose them to the risk of enforced disappearance in their country of origin.

5. Furthermore, the Working Group was informed that, in accordance with CBP policy, individuals “should generally not be held for longer than 72 hours in CBP hold rooms or holding facilities.”¹² However, in one instance brought to the attention of the Working Group, CBP held two Cuban asylum-seekers *incommunicado* for nearly ten days, although they had signed representation agreements, and their attorneys made multiple requests for information about their clients’ whereabouts and asked to meet with them. Counsels only learned their clients’ location after their clients were deported and called the attorneys from Mexico, where they could face the risk of enforced disappearance.

6. Special concerns are related to children’s situation. The Working Group was informed that CBP officials routinely separate families without providing separated family members with a way to contact or communicate with each other. One group offering legal services documented over 1,000 incidents of family separation while in CBP detention in California during a three-month period in 2023. Sources described several examples of family separation, where young children are separated from their parents. One example provided by sources to the Working Group involves an 11-year-old Colombian boy who was separated from his parents in 2022 and processed as an unaccompanied minor. In each of the examples provided, separated family members were unable to contact or obtain information about their loved one’s fate or whereabouts for days or weeks. This Working Group has underscored the torture and the emotional and psychological distress that uncertainty about the fate of a loved one generates for the family members of forcibly disappeared persons, especially when children are involved.¹³

7. Another example provided by sources to the Working Group involves an 18-year-old Venezuelan teenager with autism who was separated from his parents and three-month-old baby sister by Border Patrol in September 2023, despite his mother’s pleas to keep them together and documentation of his disability. She was told: “it doesn’t matter that he has autism, he is eighteen.” Two days later, the parents and the baby were released and were denied information on the whereabouts of their older son. Two additional days later, the parents received a phone call from their son, who informed them that he had been returned to Reynosa, Mexico, the city they had fled after their relatives had been kidnapped.

8. According to the information received, detainees are subjected to inhumane and degrading conditions causing considerable physical and psychological suffering. The sources described the death of a young girl in CBP custody after she was denied medical care and asylum-seekers abandoning their claims due to the detention conditions. The submission also referred to reports by human rights organizations that document the detention of men, women, and children, including infants, in frigid holding cells and 160 cases of misconduct and abuse of asylum applicants by CBP agents and other immigration officials.

¹² U.S. Customs and Border Protection, National Standard on Transport, Escort, Detention and Search, 14 (2015) <https://www.cbp.gov/sites/default/files/assets/documents/2020-Feb/cbp-teds-policy-october2015.pdf>.

¹³ See A/HRC/45/13/Add.3, para. 60; A/HRC/30/38/Add.5, paras. 23-32.

Allegations of Enforced Disappearance by U.S. Coast Guard and Military

9. This Working Group also received allegations of “so called” short-term enforced disappearances committed by the U.S. Coast Guard or U.S. military. According to the information received, the U.S. military conducts maritime interception operations and detains migrants, refugees, and asylum-seekers on military ships and at an offshore detention center. The U.S. Coast Guard intercepts individuals attempting to migrate to the United States by sea. According to the submission received by the Working Group, in fiscal year 2022, the U.S. military and Coast Guard intercepted more than 12,000 Haitians and Cubans in this manner. According to the sources, agencies that intercept vessels have no system for family members or legal representatives to locate or identify persons deprived of their liberty and the detainees are not provided the opportunity to contact family or legal counsel. Under the Declaration, the definition of enforced disappearance includes situations when persons are detained, and the authorities subsequently refuse to provide information about the whereabouts of those persons or conceal their fate or whereabouts regardless of the duration of the detention.

10. The Working Group was informed that the U.S. military and Coast Guard often detain migrants, refugees, and asylum-seekers in cramped, unhealthy conditions without access to adequate food, water, or medical attention, keeping them in *incommunicado* detention for hours or days, exposing them to the risk of enforced disappearance. According to the source, the U.S. military has commonly detained hundreds of migrants on crowded flight decks for days without access to adequate sanitation, shelter, or security and with no means to communicating with relatives about their whereabouts or wellbeing.

11. In 1993, the U.S. Supreme Court held in *Sale v. Haitian Centers Council, Inc.* that Haitians intercepted on the high seas could be repatriated by U.S. officials without any determination of their refugee status or protection needs. Sources informed the Working Group that detained individuals are visually inspected to determine if they have a credible fear, and most groups are returned to their country of origin without access to legal counsel. Such decisions violate the principle of *non-refoulement* and expose them to the risk of enforced disappearance.

Allegations regarding “Remain in Mexico” and Title 42 program

12. In other cases, according to the information submitted to the Working Group, thousands of migrants have been forced to stay in Mexico under the so-called “Remain in Mexico” program and Title 42 policy.¹⁴ Sources provided the Working Groups with dozens of examples involving individuals who were returned to Mexico to stay in that country while their asylum applications were being processed in the United States, violating the principle of *non-refoulement*. These individuals were exposed to the risk of enforced disappearance and other crimes, such as torture, sexual violence and kidnaping, among others. According to the information received, some of them were detained by Mexican law enforcement agents, including immigration officials, and handed over to non-state actors who held them for ransom. Many of the cases presented by the sources concern children and pregnant women.

13. Finally, according to information received by the Working Group, there are no instances of investigations of *incommunicado* detention by U.S. authorities, which reportedly remain in impunity. Nor do the victims have access to an effective remedy available to obtain redress for the harms suffered while in detention.

¹⁴ The “Remain in Mexico” (officially called the Migrant Protection Protocols) program at the Mexico-United States border was first enacted in 2019 by the Trump administration and restarted by the Biden administration in 2021. The program requires certain asylum-seekers to wait in Mexico while their claims are adjudicated in US immigration courts. Between March 2020 and May 2023, Title 42, (a U.S. policy that prohibited the entry of non-citizens at U.S. land borders based on public health concerns, also impeded access to asylum procedures and the identification of potential international protection needs, which may be contrary to the State’s international obligations), allowed U.S. immigration officials to quickly remove migrants from the United States on the grounds of preventing the spread of COVID-19.

14. The Working Group would like to bring to the Government's articles 2, 3, 7, 8, 9 to 13 and 19 of the Declaration, which are directly related to the present allegation.

15. The prohibition of enforced disappearance has attained the status of *jus cogens*, and as provided in article 7 of the Declaration, no circumstances whatsoever may be invoked to justify enforced disappearances. In accordance with article 10 of the Declaration, States must ensure that accurate information on the detention of persons and their place or places of detention, including transfers, is made promptly available to their family members, their counsel or any other persons having a legitimate interest in the information.

16. Moreover, the Working Group would like to bring to the attention of your Excellency's Government the obligations spelled out in its thematic report on enforced disappearances in the context of migration, as well as in the Guiding Principles for the Search for Disappeared Persons and, in particular, in Principles 4 and 9, which respectively establish that the search should follow a differential approach, especially when women, girls and children are concerned, and should take into account the particular vulnerability of migrants. We also recall the general comments on women affected by enforced disappearances and on children and enforced disappearances.

17. The Working Group would be grateful for your Excellency's Government cooperation and observations on the following questions:

(a) Please provide any additional information and any comment on the allegations mentioned above.

(b) Please provide information on the measures adopted to ensure that no migrants, refugees, or asylum-seekers are held in *incommunicado* detention without the means to communicate with legal experts, family members, or any other person having a legitimate interest to have access to information on their fate and whereabouts.

(c) Please provide information on whether official, up-to-date, registers of all persons deprived of their liberty are maintained in every place of detention and the measures taken to ensure that relatives of persons deprived of their liberty, their counsel, or any other person having legitimate interest have access to the information contained in such registers.

(d) Please provide detailed information on the legal grounds for maintaining migrants, refugees, and asylum-seekers in *incommunicado* detention by CBP, the U.S. military or the U.S. Coast Guards.

(e) Please provide information on the measures adopted to ensure that any person deprived of liberty by CBP, the U.S. military, or the U.S. Coast Guard is authorized to communicate with, and be visited by, his or her family, counsel or any other person a legitimate interest, including consular authorities.

(f) Please provide detailed information on the measures adopted to ensure that those detained by CBP, the U.S. military, or the U.S. Coast Guard who are detained in inhumane conditions have access to medical assistance and care, food, and clean water. Also, please provide information on special measures taken for women, pregnant women, children, and disabled persons. Moreover, kindly inform on the measures taken to ensure that they are not subject to torture, abuses or any gross human rights violations and that allegations in this regard, are subject to prompt, independent, impartial, through and effective investigations and those responsible are prosecuted and sanctioned.

(g) Please provide detailed information on the measures adopted to ensure that civil society organisations aiming at assisting persons deprived of their liberty by CBP, the U.S. military, or the U.S. Coast Guard are regularly granted access to the detention centres and that their activities are not subjected to arbitrary or unlawful interferences and restrictions.

(h) Please provide detailed information on the measures adopted to ensure that persons deprived of their liberty in facilities managed by CBP, the U.S. military, or the U.S. Coast Guard are entitled to take proceedings without delay before a court to determine the lawfulness of their deprivation of liberty and to challenge decisions of transfer, expulsion or extradition that may expose them to the danger of enforced disappearance, in contravention of the principle of *non-refoulement*.

(i) Please provide detailed information on how your Government ensures that any person having knowledge or legitimate interest, who alleges that a person has been subjected to enforced disappearance is able to lodge a complaint to a competent and independent State authority. Furthermore, please inform on how your Excellency's Government ensures that enforced disappearances are promptly, thoroughly, independently and impartially investigated, even if there has been no formal complaint.

(j) In case migrants and asylum-seekers are deported or transferred without the opportunity of presenting before the U.S. authorities a complaint for the violations suffered during their detention or during their *refoulement* to their country or another country, please provide information if the United States embassies or consulates have any special mechanism for receiving these complaints from the country where the person has been deported or relocated.

(k) Please provide detailed information on the measures taken to cooperate with other States, including the States of origin, transit or destination of migrants, refugees and asylum-seekers, in searching for, locating and releasing disappeared persons and, in the event of death, in exhuming and identifying them and respecting and returning their remains. In particular, kindly provide information on the measures taken to ensure that foreign persons deprived of their liberty in the United States are allowed to communicate with their consular authorities.

(l) Please provide detailed information on how the family of a refugee, an asylum-seeker or a migrant who has been detained by US authorities is able to obtain information about his or her relatives' fate and whereabouts from the country of origin or the country where it is located.

(m) Please provide information on the measures taken to search and find disappeared persons – in particular migrants, refugees and asylum-seekers – in line with the Guiding Principles for the Search for Disappeared Persons.

(n) Please provide information on the measures taken to guarantee that any person who commits, orders, solicits, or induces the commission of, attempts to commit, is an accomplice to, or participates in an enforced disappearance, is held criminally responsible.

(o) Please provide detailed information on the applicable legislation and the measures undertaken to ensure that any victim of enforced disappearance (thus including the disappeared person and any other person having suffered direct harm) obtains adequate compensation and integral reparation, including measures of rehabilitation and satisfaction, for the harm suffered.

18. The Working Group requests your Excellency's Government to provide a response to the above questions within 60 days. The text of the general allegation will be published along with the Working Group's post-sessional report and on its website, where also any response received by your Government will be uploaded.

Annex III

Press releases and statements

1. On 12 October 2023, the Working Group, together with other Special Procedures mechanisms, issues a press release condemning the targeted and deadly violence directed at civilians in Israel and violent and indiscriminate attacks against Palestinian civilians in Gaza and a further tightening of the unlawful blockade, which will have devastating impacts on the whole civilian population.¹
2. On 17 October 2023, the Working Group, together with other Special Procedures mechanisms, issued a press release calling on China to consider alternative solutions to forcible repatriation of North Korean escapees in line with the principle of non-refoulement guaranteed under international law.²
3. On 18 October 2023, the Working Group endorsed the statement of the Special Rapporteur on the situation of human rights defenders calling on China to release the human rights defender Guo Feixiong, whose health has been seriously deteriorating in prison.³
4. On 18 October 2023, the Working Group, together with other Special Procedures mechanisms, issued a press release urging the Government of Sri Lanka to ensure that the proposed counter-terrorism bill meets international human rights standards.⁴
5. On 19 October 2023, the Working Group issued a press release announcing its official visit to the African Union organs with judicial and human rights mandates and other regional bodies to be conducted from 21 to 26 October 2023.⁵
6. On 30 November 2023, the Working Group, together with other Special Procedures mechanisms, issued a press release concerning the alarming escalation of violence in Sudan, particularly sexual violence committed in the conflict, primarily by the Rapid Support Forces.⁶
7. On 8 December 2023, the Working Group, together with other Special Procedures mechanisms, issued a press release urging the UN member States to use all measures at their disposal and their influence to promote an immediate and permanent ceasefire in Gaza.⁷
8. On 14 December 2023, the Working Group, together with other Special Procedures mechanisms, issued a statement calling for a permanent ceasefire in Gaza to protect the rights and futures of women and girls in the occupied Palestinian territory and Israel.⁸
9. On 19 December 2023, the Working Group, together with other Special Procedures mechanisms, issued a press release emphasising the need for the international community to support civil society groups expressing international solidarity in pursuit of peace and social justice and not to conflate international solidarity with antisemitism or islamophobia.⁹
10. On 15 January 2024, the Working Group, together with other Special Procedures mechanisms, issued a press release welcoming the recent decision by Suriname's highest

¹ Israel/occupied Palestinian territory: UN experts deplore attacks on civilians, call for truce and urge international community to address root causes of violence | OHCHR.

² China must not forcibly repatriate North Korean escapees: UN experts | OHCHR.

³ China: UN expert urges release of human rights defender Guo Feixiong | OHCHR.

⁴ UN experts say Sri Lanka's counter-terrorism bill fails to heed their recommendations, status quo fundamentally unchanged | OHCHR.

⁵ UN experts on enforced disappearances to visit African Union | OHCHR.

⁶ Sudan: UN experts appalled by use of sexual violence as a tool of war | OHCHR.

⁷ UN experts urge States to unite for peace and push for ceasefire in Gaza | OHCHR.

⁸ Occupied Palestinian territory and Israel: UN experts call for permanent ceasefire to protect rights and futures of women and girls | OHCHR.

⁹ Support civil society's international solidarity efforts for peace: UN experts | OHCHR.

court upholding the 20-year prison sentence of former President Desiré Delano Bouterse for the torture and extrajudicial execution of 15 political opponents in 1982.¹⁰

11. On 19 January 2024, the Working Group, together with other Special Procedures mechanisms, issued a press release expressing grave concern that the trial in the United Arab Emirates of 84 members of civil society on spurious terrorism charges could result in the death penalty or lengthy prison sentences for acts allegedly committed in 2010-2011.¹¹

12. On 24 January 2024, the Working Group, together with other Special Procedures mechanisms, issued a press release hailing the judgment of the European Court of Human Rights holding that Greece had violated a Syrian refugee's right to life when its coastguards shot at a vessel carrying migrants and asylum seekers in 2014.¹²

13. On 31 January 2023, the Working Group with other Special Procedures mechanisms, issued a press release concerning the landmark ruling by the International Court of Justice, which they noted offers the first concrete hope to protect civilians in Gaza enduring apocalyptic humanitarian conditions, destruction, mass killings, wounding and irreparable trauma.¹³

¹⁰ Suriname: UN experts welcome landmark ruling against former President Desiré Bouterse, urge implementation | OHCHR.

¹¹ United Arab Emirates: UN experts alarmed by new charges brought against civil society in UAE87 trial | OHCHR.

¹² UN experts hail landmark ruling by European Court of Human Rights on shooting by Greek Coastguard | OHCHR.

¹³ Gaza: ICJ ruling offers hope for protection of civilians enduring apocalyptic conditions, say UN experts | OHCHR.

Annex IV

Intersessional activities of the members

1. On 11 October 2023, Ms. Neelapajit participated in an Asia-Pacific Regional Dialogue on the important role of regional human rights mechanisms in complementing the international and national human rights systems in the Asia-Pacific Region.
2. On 16 October 2023, the Chair-Rapporteur of the Working Group, Ms. Aua Baldé addressed the UN General Assembly, Third Committee, presenting the annual report and the thematic study on new technologies and enforced disappearances.
3. On 21 October 2023, the Vice-Chair of the Working Group, Ms. Gabriella Citroni conducted a training session on international standards regarding enforced disappearances to over 150 prosecutors in Peru, requested by the Peruvian authorities. The event garnered the participation and support of the Committee on Enforced Disappearances, the International Committee of the Red Cross, and of the Office of the High Commissioner for Human Rights in Peru.
4. On 22 October 2023, Ms. Baldé and Ms. Delgadillo Pérez participated in a Panel on the Situation of Enforced Disappearances and Elections in Africa, organized by the Working Group on Death Penalty, Extrajudicial, Summary or Arbitrary Killings and Enforced Disappearances in Africa, the Committee for the Prevention of Torture in Africa, during the 77th ordinary session of the African Commission on Human and Peoples' Rights (ACHPR).
5. On 25 October 2023, Ms. Baldé participated in a Side Event on the Addis Ababa roadmap and HR75, at the margins of the 77th ordinary session of the ACHPR.
6. On 27 October 2023, Ms. Baranowska participated in an event organized by the UN Special Rapporteur on Iran on the side-lines of his presentation at the UN General Assembly Third Committee in New York. The topic of the side event was "Seeking Accountability for the 1988 extrajudicial executions and enforced disappearances".
7. On 2 November 2023, Ms. Delgadillo Pérez participated online in a meeting with the Chilean organization Londres 38.
8. On 6 November 2023, Ms. Delgadillo Pérez participated online in a meeting with the Search Unit from Missing Persons from Colombia.
9. On 7 November 2023, Ms. Delgadillo Pérez participated in an online meeting with NGOs from Chile.
10. On 8 November 2023, Ms. Neelapajit participated in the launch of the report "In the dark", organized by the Karen Human Rights Group, an NGO working on Myanmar and based in Thailand.
11. On 11 November 2023, Ms. Baldé participated in a post-graduate seminar organized by Universidade Catolica Portuguesa (Porto), where she discussed the protection against enforced disappearances within the United Nations.
12. On 10 November 2023, Ms. Delgadillo Pérez participated in the Inter-University Week on Rule of Law and Access to Justice, co-organized by different universities from El Salvador, Guatemala and Honduras and the German Society for International Cooperation.
13. On 14 November 2023, Ms. Citroni held a courtesy meeting with the new Director of the National Search Commission of Mexico (*Comisión Nacional de Búsqueda de Personas*), to present the methods of work of the Working Group, applicable standards in cases of enforced disappearances and exchanged on the possibility of technical cooperation and assistance.
14. On 24 November 2023, Ms. Delgadillo Pérez addressed the Colombian Congress in a space organized by civil society for the International Day for the Elimination of Violence Against Women. She spoke about the challenges of mothers in the search for their loved ones, and the importance of passing the bill for the protection of the rights of searching

persons and women - Senate Bill No. 139/23 (Proyecto de Ley de Protección de los Derechos de las Mujeres Buscadoras).

15. On 24 November 2023, Ms. Baranowska organized a workshop “Lost in Care: Disappearance of Unaccompanied Migrant Minors from Care Facilities in Europe”, at the Hertie School in Berlin. Also Ms. Gabriella Citroni participated in the workshop.

16. On 27 November 2023, Ms. Neelapaijit participated in the seminar “Transnational Repression and its impacts on Thailand” where she presented standards and public policies for an effective investigation of enforced disappearances and the importance of ASEAN in this regard.

17. On 30 November 2023, Ms. Citroni participated in an event in the context of the University College of London Policy & Practice seminar series, where she talked about enforced disappearances, current and historical perspectives.

18. On 5 December 2023, Ms. Baldé participated in the commemoration of the UDHR75 organized by the Community of Portuguese Language Countries where she talked about enforced disappearances and encouraged its members to ratify the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance.

19. On 6 December 2023, Ms. Delgadillo Pérez participated online in a meeting with NGOs from Venezuela.

20. On 11 December 2023, Ms. Baranowska, together with Ms. Citroni, participated in the seminar “Missing Persons and Enforced Disappearances: International Institutional Responses”, organized by Università La Sapienza, in Rome, in the context of the Seminar Series “Dialoghi Romani di diritto internazionale”.

21. On 15 December 2023, Ms. Baranowska gave an online training on ‘Missing unaccompanied minors and legal obligations of states’ during the Missing Children Europe Academy organized by Missing Children Europe.

22. On 19 December 2023, Ms. Baldé participated in the workshop popularization of the African Commission on Human and Peoples’ Rights, Guidelines on the Protection of All Persons from Enforced Disappearances in Africa, organized by the ACHPR.

23. On 25 January 2024, Ms. Delgadillo Pérez participated online in a meeting with NGOs from Peru.
